

Junio 21 de 1940

10ª REUNION — 8ª SESION ORDINARIA

Presidencia del doctor RAMON S. CASTILLO,

Vicepresidente de la Nación

Senadores presentes: Alberto Arancibia Rodríguez, Mario Arenas, Ricardo Caballero, Juan B. Castro, Juan Cepeda, Alberto Francisco Figueroa, Francisco R. Galíndez, Héctor González Iramain, Laureano Landaburu, Eduardo Laurencena, José Heriberto Martínez, Alfredo L. Palacios, Jorge J. Pinto, Guillermo Rothe, Matías G. Sánchez Sorondo, Antonio Santamarina, Carlos Serrey, Gilberto Suárez Lago, José P. Tamborini, Benjamín Villafañe.

Senador ausente, con licencia: Juan R. Vidal.

Senadores ausentes, con aviso: Manuel García Fernández, Juan José Lubary.

Senadores ausentes: Herminio Arrieta, Aldo Cantoni, Raúl Ceballos Reyes, Atanasio Eguiguren, Lucio López Peña, Robustiano Patrón Costas.

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje del Poder Ejecutivo, acompañando copia de los decretos por los que se declara en suspenso el cumplimiento de leyes que acordaban diversas pensiones.

II.—Despacho de comisión.

2.—Mociones: del senador Rothe, amplada por el senador Landaburu, para considerar en la sesión del martes próximo el proyecto de ley, en revisión, sobre orden público, continuando después con el despacho sobre colonización. Se aprueba. Y del senador Cepeda, para considerar el proyec-

to sobre orden público en sesión secreta. Se rechaza.

3.—Proyecto de ley, del senador Figueroa, sobre erección de un monumento a la memoria de don Exequiel Ramos Mexía.

4.—Consideración del despacho de la Comisión de Agricultura, Industrias y Comercio en el proyecto de ley, en revisión, sobre colonización. Queda en suspenso.

5.—Apéndice: Inserciones solicitadas por el senador Landaburu.

—En Buenos Aires, a los veintidós días del mes de junio de 1940, siendo la hora 16 y 5, dice el

I

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión.
Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

Buenos Aires, junio 19 de 1940.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad remitiéndole copia de los decretos de fecha 10 del corriente mes, por los que se declara en suspenso el cumplimiento de las leyes que acordaban pensiones graciabiles, en lo que respecta a las señoras Mercedes Pujato Echagüe de Ortiz, Aguado Angelina Posse de De Soldati y Elena Lastra de Schoo.

Los fundamentos contenidos en los mismos relevan al Poder Ejecutivo de expresar en esta oportunidad las razones que inspiraron tales actos, que espero han de merecer la aprobación de vuestra honorabilidad.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

ROBERTO M. ORTIZ
Pedro Groppo.

—A la Comisión de Peticiones.

II

Despacho de comisión

NEGOCIOS CONSTITUCIONALES:

Mayoría y minoría, en el proyecto de ley, en revisión, sobre neutralidad y orden público.

—Al orden del día.

2

MOCIONES

Sr. Rothe. — Pido la palabra.

Hago indicación para que se señale la sesión del martes próximo para considerar este despacho sobre neutralidad y orden público.

Sr. Palacios. — Como único asunto.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

Yo voy a votar la indicación del señor senador por Córdoba, pero como esa preferencia trae como consecuencia necesaria, el desplaza-

miento de la que ya ha votado el Senado, de tratar el proyecto de ley sobre colonización, le pediría al señor senador que la ampliara para que, inmediatamente después, se continúe con el asunto que ya tiene preferencia para hoy.

Sr. Palacios. — En la sesión siguiente.

Sr. Landaburu. — Eso es.

Sr. Cepeda. — Pido la palabra, para ampliar la moción del señor senador por Córdoba en el sentido de que la consideración de ese proyecto de ley se haga en sesión secreta.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Pido la palabra.

No puedo oponerme, decididamente, a la moción que acaba de formular el señor senador por Santa Fe, porque no es posible prever el giro que tome el debate sobre este asunto. Fero me parece que si fuese necesario, después de escuchar los informes y antecedentes de este asunto que ha dado lugar a tan amplia discusión pública, se presentan cuestiones que reclamen el secreto de la sesión, a que se refiere el señor senador por Santa Fe, yo no tendría inconveniente en acompañarlo.

No creo conveniente, pues, quitarle, desde su comienzo, toda publicidad a un debate que desde el primer momento ha sido público y que se relaciona con un proyecto del Poder Ejecutivo que trata nada menos que de amparar la neutralidad y el orden público del país.

De manera que yo pediría al señor senador que postergara su indicación hasta que llegara el momento en que se considere oportuno tomarla en consideración.

Sr. Cepeda. — Pido la palabra.

El objeto de mi moción ha sido el siguiente: en la última sesión secreta, con el objeto de que no trascendieran los cargos formulados en la misma, se autorizó a la Presidencia para que hiciera la declaración que ha hecho, a fin de que la opinión pública no interpretara en una forma equívoca lo que se había tratado en dicha sesión.

En la reunión próxima, fatalmente vamos a tener que referirnos a las declaraciones, no solamente de los señores senadores y de los señores ministros, sino también a las expresadas por la misma opinión pública, todo lo cual puede dar lugar a infundadas alarmas. Eso es, precisamente, lo que yo quería evitar con la indicación que he formulado, de que se trate este asunto en sesión secreta, por las complicaciones que puedan producirse en el curso del debate.

ficios del engrandecimiento de su patrimonio moral y material debido en parte sobresaliente al esfuerzo y la dedicación de aquel grande e ilustre ciudadano.

San Carlos de Bariloche, punto terminal de los Ferrocarriles del Estado y progresista centro de la Patagonia, ubicado en la espléndida zona de los lagos y a donde se dirigen las corrientes viajeras que arrancan de todos los países del mundo, es el lugar indicado por la naturaleza y la historia para que se concrete en él el homenaje que inspira el presente proyecto de ley.

Estas razones y aquellas que están en el espíritu y la conciencia de todos los argentinos que conocen la obra patriótica de Exequiel Ramos Mexía, me animan a pedir, sin otros fundamentos para este proyecto de ley, el apoyo unánime de todos los sectores políticos de la Honorable Cámara.

Alberto F. Figueroa.

—A la Comisión de Negocios Constitucionales.

Sr. Presidente. — Al orden del día.

4

COLONIZACION

—Se lee:

Despacho de la comisión

**Texto de la sanción de la H. Cámara de Diputados
en los artículos modificados**

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Agricultura Industrias y Comercio ha estudiado el proyecto de ley de colonización que ha enviado, en revisión, la Honorable Cámara de Diputados; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación en la siguiente forma:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPÍTULO I

Consejo Agrario Nacional. — Creación, denominación y objeto

Artículo 1º — La Nación aplicará, de acuerdo a las presentes normas, un plan agrario destinado a poblar el interior del país, a racionalizar

No modificado.

Despacho de la comisión

las explotaciones rurales, a subdividir la tierra, estabilizar la población rural sobre la base de la propiedad de la misma y a llevar mayor bienestar a los trabajadores agrarios.

La propiedad de la tierra queda sujeta a las limitaciones y restricciones que se determinan en esta ley de acuerdo al interés colectivo.

Art. 2º — Para la aplicación de esta ley, créase el Consejo Agrario Nacional, que funcionará con la autonomía que ella le acuerda, con sede en la Capital Federal y con jurisdicción en todo el país.

Será una institución de derecho público y privado, siendo sus miembros personal y solidariamente responsables de los actos del consejo, salvo expresa constancia en acta de quien estuviera en contra de sus resoluciones.

Art. 3º — El Consejo Agrario Nacional se compondrá de cinco miembros: dos en representación del Poder Ejecutivo; uno en representación del Banco de la Nación Argentina y del Banco Hipotecario Nacional; otro en representación de las cooperativas agrícolas inscriptas en el Ministerio de Agricultura conforme a la ley número 11.388; y el otro de los consejos agrarios locales, propuestos por éstos en la forma que determina la reglamentación de la presente ley, pudiendo serlo la primera vez por el Poder Ejecutivo, y hasta tanto dichos consejos hagan la respectiva propuesta.

Los representantes elegidos por el Poder Ejecutivo lo serán entre personas de reconocida capacidad en los problemas agrarios, debiendo la presidencia y vicepresidencia ejercerse por éstos. Todos los miembros del directorio se nombrarán con acuerdo del Senado. Serán inamovibles, salvo el caso de mala conducta. Los nombrados en caso de vacante completarán el período.

Para el funcionamiento del directorio se requiere la asistencia de cuatro de sus miembros.

El presidente y los miembros del consejo agrario ejercerán sus funciones por el término de seis años, renovándose por mitad cada tres, y por sorteo la primera vez.

**Texto de la sanción de la H. Cámara de Diputados
en los artículos modificados**

Art. 2º — Créase un Consejo Agrario Nacional para aplicar esta ley, que funcionará con la autonomía que le acuerda la misma y con jurisdicción en todo el país.

Será una institución de derecho público y privado, siendo sus miembros personal y solidariamente responsables de los actos del consejo, salvo expresa constancia en acta de quien estuviera en contra de sus resoluciones.

Art. 3º — El Consejo Agrario Nacional se compondrá de cinco miembros. Dos en representación del Poder Ejecutivo, uno en representación del Banco de la Nación Argentina y del Banco Hipotecario Nacional, uno en representación de las cooperativas agrícolas inscriptas en el Ministerio de Agricultura de acuerdo a la ley número 11.388 y uno en representación de los consejos agrarios locales.

Los representantes elegidos por el Poder Ejecutivo lo serán entre personas de reconocida capacidad en los problemas agrarios, debiendo la presidencia y vicepresidencia ejercerse por éstos. Todos los miembros del directorio se nombrarán con acuerdo del Senado. Serán inamovibles salvo el caso de mala conducta. Los nombrados en caso de vacante completarán período.

Para el funcionamiento del directorio se requiere la asistencia de cuatro de sus miembros.

El presidente ejercerá sus funciones durante un período de seis años y los directores por igual tiempo, renovándose éstos cada tres años, y por sorteo la primera vez. El presidente y los miembros del consejo podrán ser reelectos.

Despacho de la comisión

Art. 4º — Tanto el presidente como los directores deberán ser ciudadanos argentinos mayores de veinticinco años de edad y tener cinco años de ejercicio de la ciudadanía en caso de ser naturalizados.

Art. 5º — La remuneración del presidente y la de los directores será fijada anualmente por la ley general de presupuesto de la Nación.

Art. 6º — No podrán ser miembros del Consejo Agrario Nacional:

- a) Los que desempeñen cualquier otra función o empleo nacional, provincial o municipal, excepto los del profesorado, y los miembros del directorio del Banco de la Nación Argentina e Hipotecario Nacional, en representación de éstos;
- b) Los jubilados nacionales, provinciales o municipales;
- c) Los que formen parte del directorio o administración de bancos o entidades privadas, vinculadas a las transacciones en bienes rurales, explotación de bosques, yerbales, algodonales o industrias análogas y de empresas colonizadoras;
- d) Los que se hallen en estado de quiebra, concurso civil o que tengan en gestión arreglos con sus acreedores.

CAPÍTULO II**Funciones y deberes del Consejo Agrario Nacional**

Art. 7º — El Consejo Agrario Nacional tendrá las siguientes funciones y deberes:

- a) Administrar el fondo general y los bienes, arrendar y enajenar los inmuebles, así como realizar las demás operaciones vinculadas con sus fines;
- b) Estudiar planes de constitución de propiedades rurales que contemplen méto-

Texto de la sanción de la H. Cámara de Diputados en los artículos modificados

El presidente del consejo ejercerá la representación legal del mismo. Tendrá voz y voto en todos los casos y el suyo será decisivo en caso de empate.

No modificado.

No modificado.

Art. 6º — No podrán ser miembros del Consejo Agrario Nacional:

- a) Los que desempeñen cualquier otra función o empleo nacional, provincial o municipal, excepto los del profesorado;
- b) Los jubilados nacionales, provinciales o municipales;
- c) Los que formen parte del directorio o administración de bancos o entidades privadas vinculadas a las transacciones en bienes rurales, explotación de bosques, yerbales, algodonales o industrias análogas y de empresas colonizadoras;
- d) Los que se hallen en estado de quiebra, concurso civil o que tengan en gestión arreglos con sus acreedores.

No modificado.

Despacho de la comisión**Texto de la sanción de la H. Cámara de Diputados
en los artículos modificados**

dica y progresivamente todo el territorio de la República, teniendo en cuenta las características agrícolas de cada zona, las vías de comunicación, distancia de los mercados consumidores, estaciones y puertos de embarque y distribución de la población en el país, y someterlos a la aprobación del Poder Ejecutivo.

- c) Convenir con los bancos oficiales e instituciones autárquicas del Estado, la incorporación al régimen de la presente ley de los inmuebles de su propiedad, o que estuvieran gravados a aquéllos, en las condiciones que se estipulen;
- d) Adquirir inmuebles del dominio privado en remates judiciales, o del Banco Hipotecario Nacional, o bancos de provincias, que por sus leyes orgánicas estén facultados a proceder a la subasta de las propiedades de sus deudores;
- e) Adquirir inmuebles en cualquier punto del país o proponer al Poder Ejecutivo su expropiación;
- f) Organizar la campaña para aumentar la población rural del país, contemplando también la necesidad de trasladar a zonas agrícolas más adecuadas a los agricultores radicados en zonas menos aptas.

Celebrar, con aprobación del Poder Ejecutivo, convenios con grupos de familias de agricultores residentes en el extranjero, para radicarlos en la República mediante contratos de compraventa o de arrendamiento, con sujeción a las condiciones establecidas por esta ley. También podrá celebrar con los mismos fines, iguales convenios con empresas privadas o instituciones de reconocida solvencia y responsabilidad, dando preferencia a las entidades que no persigan fines lucrativos, y establecer relaciones con la Organización Internacional del Trabajo, por intermedio de un consejo de administración, a fin de convenir la mejor manera de establecer y radicar en las zonas de colonización a agricultores inmigrantes;

Despacho de la comisión

Texto de la sanción de la H. Cámara de Diputados
en los artículos modificados

- g) Estudiar las condiciones de trabajo de los asalariados de la agricultura y someter a la consideración de los poderes públicos las medidas legislativas conducentes;
- h) Fomentar el cooperativismo en todas sus formas, aplicando, dentro de cada plan, las leyes del hogar, crédito agrícola, cooperativas, u otras que se dicten en el futuro, vinculadas con la economía agraria y la colonización;
- i) Propender en las distintas colonias a la formación de industrias rurales transformadoras, de acuerdo con la naturaleza de los cultivos que se realicen en aquéllas; y facilitar la aplicación y fomento del crédito agrario directo, colaborando con el Banco de la Nación Argentina;
- j) Propender a que la instrucción impartida en las escuelas rurales, se oriente hacia la formación de la capacidad técnica de los agrarios y sus hijos;
- k) Fomentar la utilización en común de las maquinarias industriales y agrícolas, a fin de obtener un mayor perfeccionamiento agrario;
- l) Gestionar la utilización de cauces de agua para riego de las tierras de las colonias y estimular el empleo de la energía eléctrica en los trabajos rurales;
- m) Promover la aplicación del seguro agrícola mutuo u oficial en las colonias que administre;
- n) Organizar en el interior y en el exterior, por intermedio de la representación diplomática y consular, una propaganda permanente destinada a difundir los propósitos de esta ley y el conocimiento de las zonas agrícolas del país;
- o) Nombrar el personal técnico y administrativo mediante concursos de selección, debiendo exigir para aquellos cargos que lo requieran, títulos expedidos por las universidades o institutos nacionales especializados, por institutos similares extranjeros o argentinos que se hayan gra-

Despacho de la comisión

Texto de la sanción de la H. Cámara de Diputados
en los artículos modificados

duado en ellos como becados de la Nación o de las provincias y en el caso de ciudadanos naturalizados graduados en el extranjero, siempre que sus títulos hayan sido revalidados en el país. Excepcionalmente podrá designar directamente técnicos extranjeros o del país, de reconocida capacidad, cuando sus actividades fueran necesarias;

- p) Someter a la aprobación del Poder Ejecutivo la reglamentación de esta ley;
- q) Formular su presupuesto anual de gastos, con la aprobación del Poder Ejecutivo, el que podrá introducir modificaciones que no constituyan aumentos y ponerlo en vigencia hasta que sea considerado por el Honorable Congreso;
- r) Dictar su reglamento interno;
- s) Elevar anualmente al Honorable Congreso la memoria descriptiva de la actividad desarrollada.

CAPÍTULO III

Inmuebles destinados a la colonización

Art. 89 — Para los fines de esta ley se utilizarán los siguientes inmuebles:

No modificado.

- a) Las tierras fiscales que se consideren aptas;
- b) Las que estén en poder de los ministerios, de los bancos oficiales o cualquiera de las otras reparticiones públicas nacionales y que no se utilicen para otros fines del Estado o para los especiales que determinaron su adquisición, o que en adelante pasen a su poder o se adjudiquen en pago de sus créditos, en virtud de las leyes y reglamentos que las rigen o de convenios que celebren con sus deudores;
- c) Las que el consejo adquiera por compra o sean expropiadas de acuerdo con la presente ley;
- d) Las del dominio privado o de las provincias o municipalidades que sean ofrecidas para ser incorporadas al régimen de la presente ley.

Despacho de la comisión**Texto de la sanción de la H. Cámara de Diputados
en los artículos modificados**

Art. 9º — Será considerado apto a los fines del inciso c) del artículo anterior todo inmueble que:

- a) No se encuentre a mayor distancia de 30 kilómetros de estación de ferrocarril o de camino de pavimento firme o de 400 kilómetros de mercados interiores o de puertos de embarque. Sólo por razones especiales, que se expresarán en cada caso, el consejo podrá resolver la adquisición de inmuebles a mayor distancia que las mencionadas;
- b) Sus condiciones ecológicas aseguren la explotación agrícola por el trabajo familiar en su máximo de eficiencia, dentro de prácticas aconsejadas por la técnica y la experiencia de la zona;
- c) Pueda obtenerse una adecuada rotación de los cultivos o la explotación de especies animales;
- d) El costo del transporte se encuentre en relación económica aceptable con el valor del producto;
- e) La cantidad de lluvia caída anualmente y la naturaleza del suelo sean adecuadas a la clase de cultivos para los cuales se les destina.

Art. 10. — La adquisición de las tierras se hará por licitación pública en la forma que reglamentará el Consejo Agrario Nacional, con aprobación del Poder Ejecutivo o en remate público, cuando dentro de las condiciones que se establecen por esta ley, fueran ofrecidas en esta forma.

Art. 11. — En ningún caso el Consejo Agrario Nacional podrá adquirir tierras de particulares o de instituciones privadas, en otra forma que las expresadas en el artículo 10, cuyos requisitos no regirán para cuando la compra se efectúe a instituciones del Estado.

CAPÍTULO IV**Expropiación de inmuebles para la colonización**

Art. 12. — En caso de que el Consejo Agrario Nacional no pudiera adquirir tierras en las condiciones especificadas en el artículo 8º para

Art. 9º — Será considerado apto a los fines del inciso c) del artículo anterior todo inmueble que:

- a) No se encuentre a mayor distancia de 30 kilómetros de estación de ferrocarril o de camino de pavimento firme o de 400 kilómetros de mercados interiores o de puertos de embarque;
- b) Sus condiciones ecológicas aseguren la explotación agrícola por el trabajo familiar en su máximo de eficiencia, dentro de prácticas aconsejadas por la técnica y la experiencia de la zona;
- c) Pueda obtenerse una adecuada rotación de los cultivos o la explotación de especies animales;
- d) El costo del transporte se encuentre en relación económica aceptable con el valor del producto;
- e) La cantidad de lluvia caída anualmente y la naturaleza del suelo sean adecuadas a la clase de cultivos para los cuales se les destina.

No modificado.

No modificado.

No modificado.

Despacho de la comisión

Texto de la sanción de la H. Cámara de Diputados
en los artículos modificados

entregarlas a la colonización, queda facultado para realizar su expropiación con la aprobación previa del Poder Ejecutivo de la que sea necesaria a los fines del cumplimiento de la presente ley. Con este objeto, se declara de utilidad pública la tierra que el Consejo Agrario Nacional con la aprobación del Poder Ejecutivo juzgue preciso incluir en los planes colonizadores.

Art. 13. — La expropiación de tierras debe referirse a las que en el momento de efectuarse no fuerán objeto de una explotación agraria racional verificada directamente por sus propietarios o a extensiones de tierra que excedan de mil hectáreas de superficie.

Art. 14. — El precio de la tierra que se expropie en cumplimiento de esta ley, que se declara de interés público, se fijará con sujeción a las siguientes normas:

- a) Al valor de valuación para el pago de los impuestos, teniendo también en cuenta la de los terrenos similares contiguos;
- b) Y al valor de su producción apreciada en los diez años precedentes al de la expropiación dentro de la zona en que se halle ubicado.

Art. 15. — Todo predio rural que no sea de jurisdicción municipal, abandonado o no explotado por su propietario durante el término de cinco años, podrá ser expropiado por el Consejo Agrario Nacional con aprobación del Poder Ejecutivo, debiendo fijarse el monto de la indemnización conforme a las bases establecidas en el artículo precedente.

Art. 16. — Cuando el dominio de las tierras sujetas al régimen de esta ley se unitique o refunda de nuevo en un mismo propietario, o cuando se subdividan, sin contemplar las necesidades del trabajo agrícola, podrán ser expropiadas por el Consejo Agrario Nacional con aprobación del Poder Ejecutivo. El precio se determinará de acuerdo a lo establecido en el artículo 14, y las mejoras deberán ser indemnizadas.

No modificado.

Art. 14. — En virtud de ser de interés público el cumplimiento de la presente ley, la indemnización al propietario de la tierra, en el caso de expropiación, se hará de acuerdo a las siguientes normas:

- a) Al valor de valuación para el pago de los impuestos; y
- b) Al valor de su producción apreciada en los diez años precedentes al de la expropiación dentro de la zona en que se halle ubicado.

No modificado.

Art. 16. — Cuando las tierras sujetas al régimen de esta ley se concentren de nuevo o se subdividan sin contemplar las necesidades del trabajo agrícola, podrán ser expropiadas por el Consejo Agrario Nacional con aprobación del Poder Ejecutivo. El precio se determinará de acuerdo a lo establecido en el artículo 14, y las mejoras deberán ser indemnizadas.

Despacho de la comisión

Texto de la sanción de la H. Cámara de Diputados
en los artículos modificados

CAPÍTULO V

Inmuebles de provincia para la colonización

Art. 17. — Para los planes de constitución de pequeñas propiedades rurales serán preferidos los inmuebles sitos en las provincias que dicten leyes que dispongan:

No modificado.

- a) Exención hasta por cinco años del impuesto territorial a los inmuebles que se incorporen al régimen de la presente ley, sea por compra o convenio con instituciones oficiales, mientras no sean arrendados o vendidos a los agricultores;
- b) Exención de la contribución territorial por un plazo mínimo de cinco años, a partir de la fecha de la escrituración a los agricultores que instale el consejo;
- c) Exención de todos los impuestos inclusive el sellado a las actividades del consejo;
- d) Instalación de escuelas, justicia de paz, policía, conservación y reparación de caminos para el transporte de los productos a estación o puerto.

CAPÍTULO VI

Inmuebles de los bancos e instituciones oficiales para la colonización

Art. 18. — Si los considera aptos, para los fines de la presente ley, el Consejo Agrario Nacional procederá a colonizar con preferencia, los inmuebles adjudicados a los bancos oficiales, instituto movilizador, ministerios, o cualquier otra repartición pública nacional.

No modificado.

A este objeto podrá adquirirlas, en las condiciones de precio y de plazos para el pago, que estipulen con dichas instituciones, o convenir con éstas el traspaso de los mismos a su favor, en cualquier otra forma.

Art. 19. — Los bancos oficiales e instituciones del Estado estarán obligados a transferir al Consejo Agrario Nacional las tierras de su propiedad que les requiera para ser colonizadas, siempre que le sea garantizado el precio que conven-

Art. 19. — Los bancos oficiales e instituciones del Estado estarán obligados a transferir al Consejo Agrario Nacional, las tierras de su propiedad que les requiera para ser colonizadas siempre que les sea garantizado el precio que

Despacho de la comisión

gan, que no podrá en ningún caso ser inferior al que resulte de la aplicación de las normas del artículo 20.

Texto de la sanción de la H. Cámara de Diputados en los artículos modificados

se convenga teniendo en cuenta el importe invertido en su adquisición por las instituciones que hagan la transferencia, no pudiendo en ningún caso ser inferior al precio resultante según las normas del artículo 20.

CAPÍTULO VII*Adquisición de inmuebles*

Art. 20. — Previa inspección efectuada por no menos de dos técnicos de su personal, para la adquisición de inmuebles, el consejo se guiará por estas normas fundamentales:

No modificado.

- a) Toda adquisición será resuelta por el voto de cuatro de sus miembros, por lo menos;
- b) La tasación del inmueble se hará de acuerdo a las bases establecidas en el artículo 14.

CAPÍTULO VIII*Subdivisión y mejoras*

Art. 21. — Adquirido un inmueble, el consejo procederá a subdividirlo en lotes, cuya superficie quedará subordinada a la naturaleza y topografía del terreno y deberá calcularse en cada región teniendo en cuenta que el agricultor pueda realizar la mayor parte de la labor agrícola utilizando su trabajo personal y el de su familia, y con capacidad productiva suficiente para cubrir sus principales necesidades de vida y acumular un capital que le permita mejorar sus condiciones sociales y económicas y la técnica de su explotación.

No modificado.

Queda autorizado el consejo para vender en remate público las fracciones sobrantes de una subdivisión que no resulten aptas para los fines de esta ley, o que por sus mejoras costosas o inútiles no permitan una pequeña explotación.

Art. 22. — El consejo introducirá mejoras que estime económicamente necesarias en los predios a ofrecerse a los agricultores. Reservará las parcelas para las explotaciones de orien-

No modificado.

Despacho de la comisión

Texto de la sanción de la H. Cámara de Diputados
en los artículos modificados

tación técnica y experimental a que se refiere el artículo 34.

Reservará el terreno destinado a escuela, siempre que no existiera una a menos de cinco kilómetros y convendrá con el Consejo Nacional de Educación o autoridades provinciales su instalación, donando el terreno a quien corresponda.

Art. 23. — El consejo procurará que los caminos se mantengan en buen estado, a cuyo efecto solicitará la colaboración de la Dirección Nacional de Vialidad, gobiernos de provincia o municipalidades.

El Ministerio de Agricultura facilitará sin cargo, al consejo, todos los elementos necesarios para el arbolado y embellecimiento de caminos y predios.

No modificado.

CAPÍTULO IX

Venta de predios

Art. 24. — El consejo estudiará tipos económicos de viviendas y podrá, previo acuerdo con el comprador, construir la casa habitación, cuyo importe, que se abonará en iguales condiciones que el precio de la tierra, no excederá del 10 % del valor de la misma. Si el comprador optara por un modelo más caro que el establecido por el consejo, deberá pagar al contado la diferencia de precio.

No modificado.

Art. 25. — El consejo podrá vender directamente el predio al agricultor que abone, por lo menos, el 10 % del precio de venta al contado, siempre que no sea propietario de inmuebles aptos para la agricultura de igual o mayor extensión que el que pretenda adquirir, y que reúna los demás requisitos prescriptos por esta ley.

Art. 25. — El consejo podrá vender directamente el predio al agricultor que abone, por lo menos, el 10 % del precio de venta al contado, siempre que no sea propietario de inmuebles agrícolas y que reúna los demás requisitos prescriptos por esta ley.

Art. 26. — La venta de los predios se hará previa justificación de la capacidad civil y de la aptitud profesional y personal de los agricultores. La capacidad civil, para todos los efectos de esta ley, se adquiere a los veinte años de edad. La aptitud profesional se comprobará por su actuación en trabajos agrícolas similares, durante un período no menor de tres años. La

Art. 26. — La venta de los predios se hará previa justificación de la capacidad profesional y personal de los agricultores. La primera, se comprobará por su actuación en trabajos agrícolas similares, durante un período no menor de tres años, y la segunda, se regirá por las condiciones que determine el reglamento aprobado por el Poder Ejecutivo.

Despacho de la comisión

Texto de la sanción de la H. Cámara de Diputados
en los artículos modificados

aptitud personal se regirá por las condiciones que determine el reglamento aprobado por el Poder Ejecutivo.

Art. 27. — Para la venta de los predios serán preferidos, en primer término, los que:

- a) Tengan familia apta para colaborar en el trabajo del predio, entendiéndose por familia la esposa, los parientes de la línea directa y los colaterales de segundo grado, que vivan con el agricultor;
- b) Sean de nacionalidad argentina, o extranjeros con residencia mayor de cinco años, y estén domiciliados en la región;
- c) Sean egresados de las escuelas de agricultura y ganadería de la Nación o provincias, o de otros establecimientos de orientación agraria, que capaciten para el trabajo especializado, siempre que cultiven la tierra directamente, y aunque no reúnan las condiciones especificadas en los incisos anteriores.

Art. 28. — El consejo adjudicará dentro de las colonias a que se refiere el artículo 34, no menos del 75 % de los predios que resulten, una vez efectuada la subdivisión, a los agricultores a que alude el artículo anterior y podrá reservar la extensión restante para adjudicarla a los que lleguen del extranjero en virtud de los convenios que menciona el inciso f) del artículo 79.

El consejo agrario determinará el porcentaje de colonos extranjeros por nacionalidad que serán ubicados en las colonias.

Art. 29. — El saldo del precio de venta será abonado:

- a) Con una amortización anual acumulativa del $\frac{1}{2}$ % e intereses del $2\frac{1}{2}$ % hasta reducirlo al 50 %. Los vencimientos se fijarán en la fecha de mayor ingreso de explotación;
- b) Con una amortización anual acumulativa e intereses iguales a los que estén en vigencia en el Banco Hipotecario Nacional, el 50 % restante;

Art. 27. — Para la venta de los predios serán preferidos, en primer término, los agricultores que:

- a) Tengan familia apta para colaborar en el trabajo del predio;
- b) Sean de nacionalidad argentina, o extranjeros con residencia mayor de cinco años, y estén domiciliados en la región.

Además, serán preferidos los egresados de las escuelas de agricultura y ganadería, de la Nación o provincia, o de otros establecimientos de orientación agraria que capaciten para el trabajo especializado, cuando reúnan las condiciones especificadas en el inciso a).

Art. 28. — El consejo adjudicará dentro de las colonias a que se refiere el artículo 34, hasta el 75 % de los predios que resulten, una vez efectuada la subdivisión, a los agricultores a que alude el artículo anterior y podrá reservar la extensión restante para adjudicarla a los que lleguen del extranjero en virtud de los convenios que menciona el inciso f) del artículo 79.

El consejo agrario determinará el porcentaje de colonos extranjeros por nacionalidad que serán ubicados en las colonias.

Art. 29. — El saldo de precio de venta será abonado:

- a) Con una amortización anual acumulativa del $\frac{1}{2}$ % e intereses del $2\frac{1}{2}$ %, hasta reducirlo al 50 %. Los vencimientos se fijarán en la fecha de mayor ingreso de explotación;
- b) Con una amortización anual acumulativa e intereses iguales a los que estén en vigencia en el Banco Hipotecario Nacional, el 50 % restante;

Despacho de la comisión

- e) La deuda será reducida en un 3 % de su valor inicial por cada hijo legítimo del comprador, que naciera en la propiedad al cumplir dos años de edad.

Texto de la sanción de la H. Cámara de Diputados en los artículos modificados

- c) La deuda será reducida en un 3 % de su valor inicial por cada hijo legítimo nacido en la propiedad, al alcanzar dos años de edad, después del segundo hijo vivo, nacido antes o después de instalado en ella.

Los compradores podrán en cualquier época efectuar amortizaciones extraordinarias en la forma que determine la reglamentación.

Art. 30. — Cuando el saldo amortizado más el monto acumulado en el fondo de ahorro alcance al 50 % del precio de venta del predio, el consejo solicitará la transferencia de su crédito al Banco Hipotecario Nacional, recibiendo cédulas hipotecarias por su valor nominal.

En este caso, la transferencia del dominio al comprador será simultánea con la constitución de la hipoteca a favor del banco.

Si el banco no aceptara la transferencia del crédito, el Consejo Agrario Nacional podrá optar entre otorgar la escritura de venta reservándose hipoteca en garantía del saldo, o diferir la escrituración hasta que sea pagado todo el precio.

Art. 31. — Los agricultores que reúnan los requisitos exigidos y que no estén en condiciones de abonar el 10 % del precio de venta al contado, podrán arrendar los predios con opción de compra, hasta por el término de cinco años, a un precio igual al 3 % del precio de venta.

El consejo queda facultado para declarar la caducidad de dichos contratos, cuando en cualquier momento de su vigencia comprobara capacidad del arrendatario para convertirse en propietario, de acuerdo a las exigencias de esta ley.

Podrá también el consejo ampliar prudencialmente el término del arriendo cuando, por circunstancias especiales, dentro del mismo, el locatario no hubiera podido cumplir con los requisitos prescriptos para convertirse en propietario.

Art. 32. — Los agricultores que al término del contrato de arrendamiento hayan cumplido con las obligaciones impuestas por aquél y los requisitos prescriptos por esta ley, podrán ad-

Art. 30. — Cuando el saldo amortizado más el monto acumulado en el fondo de ahorro alcance al 50 % del precio de venta del predio, el consejo solicitará la transferencia de su crédito al Banco Hipotecario Nacional recibiendo cédulas hipotecarias por su valor nominal.

En este caso, la transferencia del dominio al comprador será simultánea con la constitución de la hipoteca a favor del banco.

(Igual al artículo 32 de la sanción de la Cámara de Diputados.)

(Igual al artículo 33.)

Despacho de la comisión

quirir el predio que trabajan, siempre que en el acto de subscribir los boletos de compraventa, abonen el 10 % del precio de venta.

En caso de que el arrendatario al final de su contrato optare por no adquirir el terreno arrendado, el fondo de ahorro a que se refiere el artículo 38, quedará como recurso del consejo agrario.

Art. 33. — Los compradores que no hayan pagado todo el precio o transferido el saldo de la deuda del Banco Hipotecario Nacional, no podrán enajenar sus derechos al predio sin previo consentimiento del consejo y aceptación por éste del nuevo adquirente. Los arrendatarios con opción de compra tampoco podrán, sin igual requisito, ceder sus arrendamientos o subarrendar. El consejo deberá pronunciarse dentro de treinta días de formulado el pedido correspondiente.

Toda enajenación del predio o cesión o subarriendo hecho sin consentimiento del consejo, es nulo de pleno derecho.

CAPÍTULO X**Organización de las explotaciones y normas de cultivo**

Art. 34. — En cada inmueble que se subdivide en más de treinta parcelas se formará una explotación con orientación, individualidad y organización propias, con miras a la diversificación de la producción y a la implantación de industrias rurales anexas. Tendrá un consejo de agrarios, un director técnico designado por el consejo nacional y una reserva fiscal para la instalación de chacras experimentales, estaciones zootécnicas, etcétera.

El consejo estimulará y fomentará especialmente en cada colonia, la constitución y funcionamiento de sociedades cooperativas agrarias de producción, de consumo, de comercialización y de industrialización, a cuyo efecto mantendrá servicios gratuitos de información y de gestiones ante las autoridades que correspondan para su reconocimiento. Además gestionará la instalación de escuelas primarias y

Texto de la sanción de la H. Cámara de Diputados en los artículos modificados

Artículos 31 y 70: (refundidos en el artículo 33 del despacho).

Art. 31. — Mientras los compradores no hayan cancelado o transferido el saldo de su deuda al Banco Hipotecario Nacional, no podrán ceder sus derechos al predio sin consentimiento del consejo y aceptación por éste del nuevo adquirente. Las transferencias deberán ser resueltas por el consejo dentro de los sesenta días de formulado el pedido correspondiente.

Art. 70. — Toda enajenación del predio o transferencia del contrato de arrendamiento con opción de compra que se efectúe sin autorización del consejo, será nula de pleno derecho, salvo que se haya abonado el total del precio de venta.

No modificado.

Despacho de la comisión**Texto de la sanción de la H. Cámara de Diputados
en los artículos modificados**

de finalidad agrarista, las que serán orientadas hacia una enseñanza que se adapte al medio rural y costeadas por el Consejo Nacional de Educación, pudiendo, a los fines de la misma, recabar la colaboración de los técnicos del Ministerio de Agricultura o hacerlo por intermedio de los que tuviere en las colonias.

Art. 35. — Los agrarios, mientras no sean propietarios, estarán obligados a seguir las normas de cultivo y explotación que les sean indicadas por el consejo o sus representantes especialmente autorizados.

No modificado.

CAPÍTULO XI**Consejos agrarios**

Art. 36. — El Consejo Agrario Nacional procederá a instituir en las colonias oficiales y en las distintas zonas del país, donde sea necesario y en el número que juzgue preciso para orientar las explotaciones agrarias, racionalizar la producción y tutelar los intereses de los trabajadores agrarios, consejos agrarios que estarán formados por tres miembros que desempeñarán sus cargos ad honórem.

No modificado.

Los miembros de los consejos agrarios serán elegidos por el Consejo Agrario Nacional, entre los mejores productores de la zona en que se creen, ejerciendo la presidencia el gerente del Banco de la Nación, el agrónomo regional o el presidente de la cooperativa, en caso de existir en la zona donde se establezcan, o en su defecto el productor que el Consejo Agrario Nacional determine.

Art. 37. — Los consejos agrarios tendrán las siguientes funciones:

No modificado.

- 1ª Coadyuvar con la acción del Ministerio de Agricultura en todo lo relativo a la orientación y racionalización de la producción ganadera y agrícola, a la sanidad vegetal y a la organización de la industrialización y del comercio de los productos agropecuarios;
- 2ª Colaborar en la forma que reglamentará el Consejo Agrario Nacional, con éste, en la acción que debe desarrollar para la

Despacho de la comisión

Texto de la sanción de la H. Cámara de Diputados
en los artículos modificados

ejecución de la presente ley y de la reglamentación de la misma;

- 3ª Colaborar con la Sección de Crédito Agrario del Banco de la Nación Argentina para facilitar la canalización del crédito agrario a los pequeños agricultores y ganaderos;
- 4ª Actuar como delegados del Ministerio de Agricultura en la acción que éste desarrolla para combatir y extinguir las distintas plagas de la agricultura;
- 5ª Intervenir en calidad de amigables componedores en los conflictos que se susciten con motivo del trabajo de los productores agropecuarios y representarlos en sus gestiones ante el Ministerio de Agricultura y los poderes públicos nacionales, provinciales y municipales;
- 6ª Fomentar con una propaganda permanente y eficaz la organización de cooperativas de producción, de comercialización y de consumo.

CAPÍTULO XII

Fondos de ahorro

Art. 38. — Todo comprador, después de abonar el interés por el saldo de precio y su amortización, de acuerdo con el artículo 29, y todo arrendatario después de abonar el precio de su arrendamiento, de conformidad con el artículo 31, deberá abonar, además, una suma variable, para constituir el «fondo de ahorro», cuyo monto anualmente no podrá exceder del 4 % del precio de venta.

Art. 39. — El consejo fijará anualmente y en cada región, el monto de las sumas que los propietarios o arrendatarios deberán ingresar en el «fondo de ahorro». Si los resultados de la explotación anual del predio no permitieran, a juicio del consejo, el cobro de esas sumas, podrá exonerarlos de su pago.

Art. 40. — Las sumas que se abonen en virtud de lo dispuesto por el artículo 38 se depositarán en el Banco de la Nación Argentina a nombre

No modificado.

No modificado.

No modificado.

Despacho de la comisión

Texto de la sanción de la H. Cámara de Diputados
en los artículos modificados

del comprador o arrendatario y a la orden del consejo, colocadas en títulos nacionales. Los intereses de estas sumas tendrán el mismo destino.

Art. 41. — El «fondo de ahorro» se destinará para:

No modificado.

- a) Aumentar el fondo de amortización para saldar el precio del predio adquirido, en la forma que el consejo determine;
- b) Reunir la cantidad necesaria para adquirir el predio arrendado;
- c) Servir como fondo de reserva para las contingencias agrícolas, mientras no se haya instituido el seguro agrario.

Solamente cuando el «fondo de ahorro» alcance al 10 % de precio de venta, el excedente se destinará a amortizar su saldo.

Art. 42. — Si el agricultor no pudiese abonar el saldo del precio en las condiciones establecidas e invocare el caso de fuerza mayor, como causa de pérdida de sus cosechas, el consejo podrá hacer uso de las sumas destinadas a «fondo de ahorro» para el pago de las anualidades a que se refiere el artículo 29.

No modificado.

El consejo, por unanimidad, podrá suspender transitoriamente el pago total o parcial de los servicios de amortización e intereses de la deuda contraída por los compradores de predios, así como la proveniente por precio de arrendamiento, teniendo en cuenta los antecedentes de cada caso y siempre que no haya saldo disponible en el «fondo de ahorro».

Art. 43. — Una vez efectuada la transferencia a que se refiere el artículo 30, cesará la obligación del comprador de contribuir a formar el «fondo de ahorro».

No modificado.

CAPÍTULO XIII

Rescisión de contratos

Art. 44. — Todo contrato podrá ser rescindido, si el agricultor:

No modificado.

- a) No reside en el predio con su familia y no lo trabaja;

Despacho de la comisión

Texto de la sanción de la H. Cámara de Diputados
en los artículos modificados

- b) Deja de pagar una anualidad parcial o totalmente, siempre que esa falta de pago no fuera imputable, a juicio del consejo, a causa de fuerza mayor;
- c) No cumpla con cualquiera de las otras disposiciones de esta ley, o del contrato de compraventa, o de arrendamiento con opción de compra.

Art. 45. — Siempre que no sea por falta de pago, toda resolución del consejo que declare rescindiendo un contrato, deberá ser adoptada por lo menos por cuatro de sus miembros y comunicada en la época que determine el contrato; la notificación se hará por intermedio del juez de paz del lugar. El comprador tendrá un plazo mínimo de seis meses para desalojar, y el arrendatario un plazo mínimo de sesenta días, previo informe del consejo local.

No modificado.

Art. 46. — Queda facultado el consejo a proceder sin forma alguna de juicio, al embargo hasta el 33 % de la renta bruta de cada predio para aplicarla al pago de las anualidades a que se refieren los artículos 29 y 31. Los embargos se anotarán en el Registro Agrícola Ganadero de la Nación (ley número 9.644)

No modificado.

Art. 47. — Queda facultado el consejo a rescindir el contrato de compraventa, si el comprador no hubiese abonado las anualidades a que se refiere el artículo 29.

No modificado.

Art. 48. — En caso de fallecimiento del comprador, el consejo podrá hacer uso del derecho de rescisión, y ceder nuevamente el predio a alguno de los herederos que considere capaz de continuar la explotación agraria, o a un tercero si no hubiere herederos en esas condiciones. En este caso, depositará a la orden del juez y a nombre de la sucesión el monto de las amortizaciones y el valor estimado de las mejoras, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley.

No modificado.

Art. 49. — En caso de fallecimiento del arrendatario con opción de compra, queda facultado el consejo para rescindir el contrato. Para una nueva adquisición del predio, deberá preferir a la viuda del locatario o a uno de sus hijos mayor de edad. Declarada la caducidad de la promesa de venta por fallecimiento y no

No modificado.

Despacho de la comisión**Texto de la sanción de la H. Cámara de Diputados
en los artículos modificados**

adjudicado el predio a un heredero, el consejo fijará una indemnización por las mejoras efectuadas, de acuerdo a lo dispuesto por esta ley, cuyo importe depositará a la orden de la sucesión respectiva.

CAPÍTULO XIV*Indemnización de mejoras*

Art. 50. — El consejo al declarar rescindido el contrato devolverá lo amortizado, deduciendo lo necesario a fin de que resulte abonado el 3 % del valor de la venta como arriendo anual durante el tiempo que ocupó el lote, e indemnizará las mejoras en el estado en que se encuentren al recibir la posesión del predio, siempre que no haya sufrido deterioro imputable al agricultor con motivo del desalojo.

No modificado.

Art. 51. — El justiprecio de las mejoras y el monto de la indemnización serán fijados por el consejo, previo asesoramiento del consejo agrario local y audiencia del interesado.

No modificado.

CAPÍTULO XV**(Nuevo)***Colonización granjera*

Art. 52. — El Consejo Agrario Nacional estudiará e implantará en las regiones del país que crea conveniente, un plan de colonización granjera, de tipo familiar.

Art. 53. — Las tierras para colonización granjera se dividirán y venderán en parcelas no mayores de cincuenta hectáreas y se destinarán, además de los distintos cultivos y cuidado de animales de labor, a avicultura, apicultura, cría de conejos, cerdos, mantenimiento de vacas lecheras y demás industrias granjeras y transformadoras de sus productos.

Art. 54. — Cuando exista un número suficiente de explotaciones granjeras, a juicio del Consejo Agrario Nacional, se constituirán consejos granjeros locales, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo XI de esta ley; y cuando a juicio del Ministerio de Agricultura hubiera en el país un número suficiente de consejos granjeros locales, éstos tendrán los mismos derechos

Despacho de la comisión

Texto de la sanción de la H. Cámara de Diputados
en los artículos modificados

que los consejos agrarios para estar representados e integrar, indistintamente, el Consejo Agrario Nacional.

En todo lo demás la colonización granjera se regirá por las prescripciones de esta ley sobre colonización agrícola.

CAPÍTULO XVI

Explotación agraria suburbana

Art. 55. — El Consejo Agrario Nacional propenderá al parcelamiento y formación de pequeñas explotaciones agrarias intensivas en los ejidos de las ciudades y villas, conviniendo con las respectivas comunas la forma de realizar la tarea.

(Igual al artículo 52.)

Art. 56. — Las explotaciones ejidales se ajustarán a las normas generales establecidas para las rurales, debiéndose tender a formar especialmente pequeñas quintas y granjas. En cada ejido con más de treinta parcelas se organizará una cooperativa y un consejo agrario.

(Igual al artículo 53.)

Art. 57. — En tierras cercanas a las ciudades, el consejo propenderá especialmente a la formación de colonias de tamberos, con la organización establecida en la presente ley.

(Igual al artículo 54.)

CAPÍTULO XVII

Colonización privada

Art. 58. — Los propietarios que destinen inmuebles a la colonización y acepten las normas que dicte el consejo con aprobación del Poder Ejecutivo, quedan eximidos por el término de cinco años y por la extensión colonizada, del impuesto territorial desde la fecha en que se extiendan a favor de los colonos respectivos, contratos de venta. Quedan, también, exentos de todo impuesto de sellado y derecho de inscripción.

(Igual al artículo 55.)

Art. 59. — El consejo gestionará de los gobiernos de provincia la exención del impuesto territorial para los inmuebles a que se refiere el artículo anterior.

(Igual al artículo 56.)

Art. 60. — El Consejo Agrario Nacional podrá aceptar inmuebles privados que encuadren den-

Art. 57. — El Consejo Agrario Nacional podrá aceptar inmuebles privados que encuadren

Despacho de la comisión

tro de las condiciones que esta ley establece, para colonizarlos dentro de las normas de la misma, cobrando únicamente los gastos que por tal concepto se realicen y acreditando los créditos que por ese hecho resultaren.

El consejo inspeccionará las colonias particulares del país, sean de propietarios o arrendatarios, fomentando la buena colonización y difundiendo la cultura agraria en todos sus aspectos.

CAPÍTULO XVIII*Recursos del consejo*

Art. 61. — El Consejo Agrario Nacional dispondrá de los siguientes recursos:

- a) Hasta la cantidad de \$ 30.000.000 m/n. que el Poder Ejecutivo entregará con imputación a esta ley, dentro de los noventa días de promulgada, provenientes de rentas generales o del producido del fondo de beneficios de cambio, o de una operación de crédito interno o externo, pudiendo usarse de los tres medios a la vez;
- b) Hasta la cantidad de \$ 70.000.000 m/n., que el Poder Ejecutivo desde el año siguiente a la promulgación de esta ley entregará anualmente en cuotas de pesos 10.000.000 moneda nacional, o su equivalente en títulos externos o internos;
- c) El producido de la venta y arrendamientos de las tierras regidas por la presente ley;
- d) Los fondos que se recauden en virtud de lo dispuesto por las leyes números 4.167, 5.559 y 6.712 y sus reglamentaciones vigentes;
- e) El producido de las comisiones, de los intereses punitivos, derechos de inspección, etcétera, que fije el consejo, y de los legados, donaciones, etcétera, que se le hagan. Estos fondos serán depositados en una cuenta especial en el Banco de la Nación Argentina a la orden del consejo.

Texto de la sanción de la H. Cámara de Diputados en los artículos modificados

dentro de las condiciones que esta ley establece, para colonizarlos dentro de las normas de la misma, cobrando únicamente los gastos que por tal concepto se realicen y acreditando los créditos que por ese hecho resultaren.

(Igual al artículo 58.)

Despacho de la comisión**Texto de la sanción de la H. Cámara de Diputados
en los artículos modificados**

Art. 62. — Mientras no se empleen en los destinos previstos por esta ley, los recursos a que se refiere el artículo anterior, el consejo podrá invertirlos hasta un 90 % en títulos nacionales. Los intereses que devenguen estos títulos formarán parte de los recursos del consejo.

(Igual al artículo 59.)

CAPÍTULO XIX*Disposiciones generales*

Art. 63. — Las tierras situadas en las fronteras del país, se destinarán a la formación de colonias agrarias pobladas con familias de ciudadanos nativos. A este efecto decláranse de utilidad pública, las que se encuentren en poder de particulares, las provincias o municipalidades.

(Igual al artículo 60.)

Art. 64. — Los colonos a que se refieren los artículos 45, 51, 52 y 53 de la ley número 12.367 tendrán derecho a los beneficios que se otorgan en esta ley a los arrendatarios o compradores de predios, quedando bajo el control del consejo agrario, conforme a la reglamentación que dicte de acuerdo con la Dirección General de Gendarmería Nacional. Las colonias serán organizadas con sujeción a las bases de esta ley.

(Igual al artículo 61.)

Art. 65. — El consejo agrario acordará tierras en propiedad, en los territorios nacionales, a los indígenas del país y establecerá el régimen de explotación de los mismos, teniendo en cuenta sus costumbres y métodos de trabajo. Las tierras que se les adjudique no podrán ser vendidas, gravadas, ni embargadas, sin el consentimiento del consejo agrario.

(Igual al artículo 62.)

Las colonias de indígenas, que se organizarán en tierras fiscales aptas, serán orientadas técnicamente y se instalarán en ellas escuelas de acuerdo a las preceptuadas en el artículo 34.

Art. 66. — El Consejo Agrario Nacional podrá en las tierras de que disponga, concertar con empresas o compañías capacitadas, la explotación temporal de bosques, sujetas a las condiciones y formas que determine en los casos que la tierra fuese necesaria a los fines de esta ley.

(Igual al artículo 63.)

Art. 67. — El consejo organizará un régimen de préstamos para instalación, vivienda y habi-

(Igual al artículo 64.)

Despacho de la comisión

Texto de la sanción de la H. Cámara de Diputados
en los artículos modificados

litación, que no excederán de \$ 6.000 m/n., en cada caso y a los que tendrán opción;

- a) Los solicitantes comprendidos en el último apartado del artículo 27;
- b) Los agricultores e hijos de agrarios, preferentemente los casados, que soliciten predios en compra o en arrendamiento.

El importe será restituído por el deudor en los plazos y forma que determine la reglamentación.

El consejo no podrá invertir en estas operaciones y las del artículo 24 más del 10 % de los recursos que le acuerda esta ley.

Art. 68. — La suma total que resulte de la venta fraccionada de cada inmueble, no podrá ser inferior a su precio neto de costo, ni excederlo en más de 15 por ciento.

(Igual al artículo 65.)

Art. 69. — Los predios vendidos de acuerdo con lo dispuesto por esta ley no podrán tener ninguna afectación que no sea la que corresponda a favor del Consejo Agrario Nacional, hasta tanto no se haya satisfecho íntegramente el precio, o transferido el crédito, al Banco Hipotecario Nacional.

(Igual al artículo 66.)

Art. 70. — El predio vendido, las mejoras adheridas al mismo, los frutos del suelo arrendado o vendido y los elementos de trabajo de los agricultores, serán inembargables, por deudas contraídas con anterioridad a la firma del contrato de arrendamiento, con opción de compra o de compraventa. Serán también inembargables por deudas contraídas con posterioridad a la firma del respectivo contrato, la tierra, las mejoras y los elementos de trabajo del agricultor, salvo el que pudiera realizarse a los efectos del préstamo establecido en los artículos 24 y 67.

(Igual al artículo 67.)

Art. 71. — El consejo cobrará el 6 % de interés por toda deuda de plazo vencido, salvo disposición expresa en contrario adoptada por aquél en cada caso.

(Igual al artículo 68.)

Art. 72. — No se podrá adjudicar más de un predio a una misma persona ni a sus hijos o padres, a menos que aquéllos formen otra familia agricultora, de conformidad con lo dispuesto

(Igual al artículo 69.)

Despacho de la comisión

Texto de la sanción de la H. Cámara de Diputados
en los artículos modificados

en esta ley y lo que establezca su reglamentación.

Exceptúase de lo dispuesto en el párrafo anterior, toda persona que tenga cuatro hijos varones que vivan y trabajen con ella, en cuyo caso podrá adquirir tantos predios como veces reúna este requisito.

Art. 73. — Los compradores de predios quedan exonerados del pago de todo impuesto nacional que grave la propiedad raíz, por el término de diez años, a contar desde la fecha de la escrituración.

(Igual al artículo 71.)

Art. 74. — El consejo agrario estará exento de todo impuesto en sus operaciones y el cobro de sus créditos se realizará por vía de apremio.

(Igual al artículo 72.)

Las maquinarias, equipos, semillas y materiales que sea necesario importar, quedan libres de derechos de aduana.

Art. 75. — El Consejo Agrario Nacional queda autorizado para solicitar la cooperación de los gobiernos de provincia y de las municipalidades, así como la colaboración de las instituciones particulares en la acción de propaganda y divulgación de la presente ley.

(Igual al artículo 73.)

Art. 76. — Incorpórase al Consejo Agrario Nacional, la actual Dirección de Tierras del Ministerio de Agricultura con todo el personal que le asigne el presupuesto vigente. La incorporación se efectuará en el momento que el Poder Ejecutivo lo considere conveniente dentro de un plazo máximo de tres años, contando desde la promulgación de esta ley. Una vez incorporada, la Dirección de Tierras dependerá en lo sucesivo del Consejo Agrario Nacional, que tendrá a su cargo el cumplimiento de las leyes números 4.167, 5.559 y 6.712.

(Igual al artículo 74.)

Art. 77. — En los títulos de propiedad que otorgue el Estado deberá insertarse una cláusula especial, en la que se establezca que las tierras que enajene, no podrán formar parte del patrimonio de sociedades anónimas o de sociedades comerciales, con excepción de las cooperativas.

(Igual al artículo 75.)

Los Registros de la Propiedad no anotarán transferencias de tierras de origen fiscal a favor de las mismas.

Despacho de la comisión**Texto de la sanción de la H. Cámara de Diputados
en los artículos modificados**

Art. 78. — El consejo estará facultado para ubicar a los arrendatarios con plazos a vencer existentes en los campos que adquiera, previa indemnización de mejoras, en lote de superficie y condiciones agrológicas equivalentes, si la ubicación del lote que arriendan, impide efectuar el fraccionamiento racional de la tierra para su venta. Esta disposición regirá también para las instituciones oficiales de colonización de las provincias.

Art. 79. — Deróganse todas las disposiciones que se opongan a las de la presente ley.

Art. 80. — Comuníquese, etc.

(Igual al artículo 76.)

(Igual al artículo 77.)

Disposición transitoria

Art. 78. — Hasta tanto se constituyan los consejos agrarios a que se refiere el artículo 36, el representante de los mismos, a que alude el artículo 39, será designado por el Poder Ejecutivo eligiéndolo entre productores auténticos. Dicho miembro del consejo cesará en su cargo tan luego se nombre a propuesta de los consejos agrarios en la forma que reglamentará el Poder Ejecutivo, el que debe ejercer la representación de éstos.

(Refundido con el artículo 39 del despacho.)

Sala de la comisión, junio 6 de 1940.

*Laureano Landaburu. — Gilberto
Suárez Lago. — Benjamín Vi-
llafañe.*

Sr. Presidente. — En consideración.

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

Debo lamentar, señor presidente, que se inicie la consideración de este asunto, en ausencia del señor ministro de Agricultura, que en este momento concurre a la Cámara de Diputados a contestar una interpelación. El señor ministro me ha hecho llegar gentilmente su deseo de participar en este debate. Creo, sin embargo, que su ausencia no debe impedir al Senado iniciar de inmediato la consideración del despacho que acaba de leerse, contando que el señor ministro podrá posteriormente asistir a las sesiones venideras en las que ha de continuarse la consideración de este asunto.

En nombre de la Comisión de Agricultura, Industrias y Comercio, debo informar el despacho que hemos suscripto por unanimidad, aconsejando al Senado que apruebe la sanción de la Cámara de Diputados, en el proyecto de ley creando el Consejo Agrario Nacional, con las modificaciones que hemos introducido en colaboración con el señor ministro de Agricultura y que tendré oportunidad de explicar en el curso de mi exposición.

La comisión, señor presidente, ha creído que debía darse de inmediato a la tarea de estudiar y despachar esta ley, tantas veces prometida y tantas veces postergada.

Las entidades vinculadas a nuestras actividades agrarias, los órganos más importantes de la prensa nacional y el propio Poder Ejecutivo, en el último mensaje inaugurando las sesiones ordinarias del Congreso, nos han dirigido expresiones de anhelos y, a veces, reclamaciones perentorias para la sanción inmediata de esta ley.

La sanción de la Cámara de Diputados se hizo sobre la base de un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo anterior y de otros proyectos de ley y anteproyectos de despachos presentados ante la Comisión de Legislación Agraria por diputados de distintos sectores y de distintas provincias; después de un informe amplio y erudito producido por el diputado Palacio, y de un debate en el que intervinieron representantes de todos los sectores políticos de la Cámara popular, el despacho fué sancionado con ligeras modificaciones y casi por unanimidad, tanto en general como en particular. Trae, pues, al Senado esos antecedentes y esos auspicios.

Pocas materias, señor presidente, como la relativa a nuestra tierra pública y a los planes de colonización, han merecido mayor número de iniciativas parlamentarias en nuestro país. Puede afirmarse que casi no hay ministro del ramo, ni legislador versado en estos temas, que no

haya presentado su proyecto de colonización. En el último medio siglo llegan a cerca de un centenar. Los hay de todos los tipos: de colonización pastoril, de colonización agrícola, de colonización granjera, de colonización industrial, de colonización indígena y de colonización fronteriza. Unos, se refieren a todo el territorio de la República, otros, a determinadas zonas o regiones del país y en cada uno de ellos, pueden notarse las orientaciones y las características que corresponden a las ideas propias de sus autores. Puede afirmarse, sin embargo, de un modo general, que la mayor parte de ellos son proyectos de colonización agraria más o menos del tipo del que propicia este despacho.

He tenido necesidad de leer muchos de ellos y me voy a referir a algunos en el curso de mi informe, sea porque la autoridad de sus firmantes así lo aconseje, sea porque encaran la solución de este problema en forma y con ideas que revelan el modo de sentir y de pensar sobre esta materia en determinada época de de nuestra evolución agraria.

Además, he confeccionado una nómina completa de esas iniciativas, que pido sea insertada en el Diario de Sesiones, (1) para salvar del olvido tantos esfuerzos útiles y bien intencionados.

No voy a cansar al Senado con cifras relacionadas con nuestra importancia y con nuestra evolución agrícola, pero he confeccionado un cuadro (2) sobre la base de las cifras de los censos nacionales levantados en el país, que demuestra la superficie cultivada en los distintos renglones agrícolas, el número de explotaciones, las circunstancias de si se hacen por arrendamiento o por los mismos propietarios, la mención del número de personas y de familias vinculadas a las mismas y otros detalles de indudable interés.

Me limitaré a decir sobre este punto que, según el censo de 1937, la República tenía cultivada 28.116.300 hectáreas, de las que corresponden a cereales 17.560.826; a cultivos industriales 4.666.264; a legumbres 224.793; a frutales 116.367; a forrajes 5.396.755; y a otros cultivos 152.188 hectáreas. Había 452.007 explotaciones, de las cuales se realizaban por los propietarios 200.318 y por arrendatarios 171.142. Ellas ocupaban 276.129 argentinos y 163.745 extranjeros.

En nuestro país, señor presidente, la tierra pública ha servido para todo: como base y ele-

(1) Véase pág. 411.

(2) Véase pág. 413.

mento de planes de colonización y de trabajo más o menos estudiados; como fuente de recursos fiscales; como garantía de crédito público; como objeto de premios para los servicios ciertos o presuntos prestados por los militares y aun por los civiles eminentes del país; y ha servido sobre todo, como materia y como pretexto de ensayos, de especulaciones y de aventuras que, en la mayor parte de los casos, no han hecho más que perturbar y demorar nuestra evolución agraria.

Este problema de la colonización en el país ha sido y continúa siendo al propio tiempo, un problema de población. Reviste así, un doble aspecto, político y económico. Ambos objetivos fundamentales estuvieron siempre unidos en la mente de nuestros hombres eminentes que se dedicaron a solucionar los problemas que le son conexos y ambos marchan unidos de la mano, por decirlo así, en las previsiones de la Constitución nacional. Así, al lado de los principios generales que sancionan la igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros, la libertad de navegación de los ríos interiores para todas las banderas del mundo, la conveniencia de celebrar tratados de paz y de comercio con los distintos países y de fomentar la inmigración europea, rigen las prescripciones expresadas del artículo 67, incisos 4º y 16, que refiriéndose a las facultades del Congreso, le señala la de disponer el uso y enajenación de la tierra pública y promover planes de inmigración y colonización de las tierras de propiedad nacional.

Esta ley se sanciona, en consecuencia, en cumplimiento de una previsión y de un mandato constitucional.

La visión de nuestros grandes hombres, Alberdi, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Pellegrini, sobre nuestros progresos demográficos no ha sido, desgraciadamente, profética. La población de la República permanece casi estacionaria durante el último cuarto de siglo por la influencia de dos factores conocidos en cuyo examen no me voy a detener para no alargar inútilmente esta exposición: la disminución de la natalidad y la disminución de la corriente inmigratoria acompañada de la reemigración de los extranjeros que vuelven a su país de origen o a otros países de América. Nuestra proporción demográfica no puede ser más desconsoladora; apenas tenemos 4 habitantes por kilómetro cuadrado.

Mientras tanto, inmensas superficies de campos aptos para colonización pastoril y agrícola, de campos propicios para todos los cultivos de la zona templada y aun de la subtropical, de tierras suficientemente regadas

por la lluvia y fecundadas por el sol permanecen incultas, esperando que el brazo del hombre vaya a convertirlas en factores eficientes de la producción, de la riqueza y del bienestar general.

Entre nosotros, el problema no es grave solamente en cuanto se refiere a nuestra escasa población sino en cuanto toca a la distribución inadecuada e inconveniente de la misma. Es un hecho notorio que ha sido ya señalado por muchos hombres de gobierno y por muchos legisladores nuestra tendencia al urbanismo, que ha llegado a constituir entre nosotros, un problema con perspectivas realmente inquietantes.

Ya en 1873, Alberdi, a quien no es posible dejar de citar cuando se discuten asuntos de esta clase, escribiendo desde París, sobre el alcance de su famoso apotegma, al que muchos habían dado un sentido que no tenía, y después de declararse francamente partidario de la inmigración espontánea, dice a este respecto lo siguiente: «El secreto de poblar reside en el arte de distribuir la población en el país. La inmigración tiende a quedarse en los puertos porque allí acaba su larga navegación, allí encuentran alto salario y vida agradable. Pero el país pierde lo que los puertos parecen ganar. Es preciso multiplicar los puertos para distribuir la población en las costas; y para poblar el interior que vive de la agricultura y de la industria rural necesita América embarcar inmigración rural de Europa, no la escoria de sus brillantes ciudades que ni para soldados sirve.»

Casi medio siglo después, Joaquín V. González, preconizando en este recinto la sanción de las leyes llamadas complementarias del censo, reafirmaba ese concepto diciendo: «La acumulación de la masa extranjera en el litoral de la República y principalmente en las grandes ciudades que están sobre ese litoral, produce ese fenómeno en la vida económica del país, que ha hecho que el cuerpo de la República sea comparado con el de un monstruo humano, en el cual la cabeza fuese más grande y pesase más que todo el resto del cuerpo.»

Este fenómeno del urbanismo, de la tendencia irreprimible a vivir lejos del campo y bajo la luz de las ciudades, no es exclusivo de nuestro pueblo ni de esta época de nuestra historia. Otros, lo han sufrido también y han tenido que lamentar sus consecuencias.

Mr. Henry A. Wallace, secretario de Agricultura de los Estados Unidos, en un libro que he citado en el Senado otras veces *Las nuevas fronteras*, bajo el epígrafe sugestivo, *Emigración a las ciudades*, dice: «Hacia el término de

la civilización grecoromana del tiempo de César adelante, es interesante leer la creciente emigración del pueblo a las ciudades, a medida que aumenta la riqueza. Allí formaron gremios y sociedades de obreros. Muchos esfuerzos se hicieron y a menudo con auxilio del gobierno para fijar salarios y precios. La vida en las ciudades era más agradable que en los campos italianos. La población urbana, quería pan barato. Y así el agricultor italiano, productor de trigo, fué sacrificado en beneficio del productor de trigo del norte de Africa.»

Sigue después haciendo reflexiones interesantísimas sobre este tema.

Me referiré, por último, a un trabajo muy completo publicado sobre esta materia en la Revista Económica Argentina, número 246, por el doctor Alejandro E. Bunge, bajo el título «La Agrícola Argentina, país de población urbana».

«La agrícola argentina —dice— es ahora uno de los países del mundo con mayor proporción de vida urbana. Tres cuartas partes de su población vive en pueblos y ciudades de más de mil habitantes, dedicada a las industrias, al comercio, a los transportes, a los servicios públicos, a la vida administrativa y demás actividades no agrícolas.»

Sigue desarrollando el tema y haciendo referencia a la evolución de la población rural urbana argentina y consigna en gráficos y cuadros, con números interesantísimos. La síntesis de esas cifras, con referencia a la población que vive en centros de más de 1.000 habitantes, resultante de los censos nacionales levantados en el país, es la siguiente: En 1869 teníamos el 33 % sobre el total de población urbana; en 1895, habíamos llegado al 42 %; en 1914, al 58 %; en 1930, al 68 %; y en 1938, al 74 por ciento.

Sólo hay dos países en el mundo, Holanda y Gran Bretaña, con un mayor coeficiente de población urbana que el nuestro.

Estas conclusiones llaman realmente a la más honda meditación a los hombres de gobierno.

Esta ley, señor presidente, está inspirada en el propósito de corregir en parte y en cuanto pueda ser remediable este problema en una ley de colonización agrícola, una mejor distribución de la población argentina en nuestro inmenso territorio. No hemos llegado, por cierto, a la saturación de población extranjera que pueda inspirar los temores expresados en otros países, y que han motivado la sanción de leyes restrictivas, como en Estados Unidos y en el Brasil y aun de las leyes llamadas «de cuota», que fijan

limitativamente los cupos de la inmigración extranjera con relación a la población censada del país.

Pero yo no quiero aventurarme a hacer incursiones sobre este tema de la inmigración, porque en estos momentos, según es notorio, se está elaborando la próxima ley de la materia que vendrá al Senado y nos dará la oportunidad para abordar directamente el asunto.

Sólo quiero decir que, según una publicación muy interesante que tengo sobre la banca, la República Argentina figura entre los 6 países del mundo que han recibido una inmigración superior a 500.000 habitantes en diversos períodos de su historia. Esos países son, en orden decreciente: Estados Unidos, Argentina, Canadá, Brasil, Indias Británicas y Cuba. La República Argentina habría recibido, entre 1857 y 1924, 5.486.000 inmigrantes, una cifra equivalente, aproximadamente, al 42 % de su población actual.

El Senado me ha de permitir que, antes de entrar a hablar sobre las bases fundamentales y las orientaciones que deben caracterizar nuestra ley de colonización agrícola, haga una ligera revista de la legislación extranjera y de los antecedentes argentinos sobre esta materia. No lo haré por el mero placer de hacer citas; pero de ese examen, de la confrontación del despacho con muchos de esos antecedentes extranjeros y argentinos, me propongo demostrar, como conclusión útil para este debate, que casi todas las soluciones que el despacho contiene, tienen su antecedente y su apoyo en la mayor parte de esas leyes extranjeras y de esas leyes y proyectos nacionales.

En Estados Unidos, hay una amplia legislación estadual en materia de tierras y colonización, en la que no voy a entrar para no prolongar demasiado este informe. En este país, las cuestiones agrícolas asumen una importancia considerable, hasta el punto de constituir una de las principales líneas separativas de los partidos políticos que se disputan el gobierno de la gran república del Norte. Mr. Wallace, secretario de Agricultura de la Unión, en el libro que cité hace un momento, se refiere con gran colorido a muchos episodios vinculados a la evolución agraria en el período de la postguerra, que es, sin duda, uno de los más intensos. Recuerda que, después de la conferencia agrícola convocada por el presidente Harding, en 1922, se iniciaron las acciones y las reacciones recíprocas entre los partidos y los grupos agrarios americanos.

Entre las muchas proposiciones que se pre-

sentaron y aprobaron, figura la que establece la conveniencia de «tomar inmediatamente medidas para restablecer el justo valor de cambio para todos los productos agrícolas con el de otras mercaderías».

Es innecesario recordar que en aquel país, a diferencia del nuestro, el problema no es de producción sino de superproducción, de ajuste de la producción con el consumo y la exportación, de costos, de precios y de intercambios.

Después de una serie de vicisitudes y de la recia oposición de los presidentes republicanos Coolidge y Hoover al advenimiento de la nueva política agraria iniciada por el Partido Demócrata, fué sancionada por fin, en 1929, la ley nacional llamada de ventas agrícolas, y, después del veto del presidente Coolidge, la famosa ley de ajustes agrícolas de 1933.

Por esa ley se establecieron primas a la exportación de diversos renglones agrícolas; se autorizó, para ajustar la producción con el consumo, la destrucción de enormes extensiones cultivadas y se llevó a cabo, en ese orden de cosas, la destrucción de 10.000.000 de acres de algodón; se estableció un amplio sistema de subsidios y de préstamos a los agricultores para ayudarlos en los momentos difíciles; y se procuró, en todo momento, salvar cuando menos los costos de producción.

Los efectos finales de esa ley no se conocen todavía, pero puede afirmarse de ella que ha marcado una época en la evolución agraria americana que constituye, sin duda, el ensayo más formidable que se haya hecho de los principios de la economía dirigida en la solución de problemas agrarios.

En Australia, se ha notado en los últimos tiempos, un intenso movimiento en favor de la colonización agraria, caracterizado por la división de las tierras en pequeñas parcelas y por la demanda del elemento joven para servir la mano de obra requerida por esta colonización, hasta el punto de que la oferta allí está muy por debajo de la exigencia de la demanda.

En Canadá se han instalado, en colaboración con los ferrocarriles canadienses, en los últimos tiempos, más de 3.000 familias y se han colocado aproximadamente más de 7.000 solteros en el campo, en las regiones colonizadas próximas a las líneas. Como se ve allí se aceptó también, el principio de que la colonización debe hacerse preferentemente, en las tierras aptas próximas a los ferrocarriles y en los caminos afirmados, tal como lo propicia este despacho, aceptando aquel principio de que el fe-

rocarril constituye la mejor ley de colonización.

De España merece citarse el decreto del 2 de septiembre de 1933, subscripto por el presidente Alcalá Zamora, que fijó las atribuciones del Instituto de Reformas Agrarias, que se había creado en 1932. Se creó, también, el Instituto Nacional de Colonización que tenía a su cargo el contralor de la ejecución de la ley y de todo lo que se refiere a cultura agraria, estudio del suelo, sus condiciones, etcétera.

Brasil tiene también una importante legislación estatal en esta materia. Me limitaré a citar, en el orden federal, el decreto del 4 de mayo de 1938, sobre inmigración y colonización, que es amplísimo. Tiene cerca de 100 artículos y constituye, por la situación institucional del país vecino, una verdadera ley de colonización e inmigración. Fija las cuotas de inmigración y regula todos los detalles concernientes al cumplimiento de la misma.

Méjico es uno de los países que más se ha preocupado de abordar la solución de estos problemas, ofreciendo las características propias de un país de legislación eminentemente liberal y avanzada. En cumplimiento del artículo 27 de su Constitución de 1917, que ya contiene en germen todo un plan de política agraria, se dictó la ley del 11 de mayo de 1936, declarando de utilidad pública las tierras colonizables, autorizando, en consecuencia, su expropiación en manos de los particulares. Para ser colono, se requiere, ser agricultor con experiencia en trabajos agrícolas, mayor de edad, de buena salud y tener elementos de trabajo o créditos para adquirirlos. A los extranjeros se les exige un depósito previo en el Banco Nacional de Crédito Agrícola, de 1.000 pesos por familia, para garantizar que tienen esos elementos de trabajo y de vida.

Méjico cuenta además, con un amplio Código Agrario sancionado en 1934, que es muy vasto y comprende todo lo relativo a colonización, organización de las autoridades agrarias, aguas, ejidos, divisiones de la tierra, etcétera.

Chile sancionó en 1928 la ley número 4.496 creando la Caja de Colonización Agrícola, con un capital de 100.000.000 de pesos. Las tierras aptas se adquieren por licitación o por compra, autorizándose también, la expropiación tal como lo sostiene este despacho, para el caso de que esas tierras no fueran suficientes para cumplir un plan.

Las tierras aptas se dividen en lotes de 20 hectáreas de riego al Sur del río Manle o de 40 al Norte del mismo, o 500 hectáreas si son tie-

rras de secano. La tierra se entrega en propiedad a los agricultores, quienes pagan el 10 por ciento al contado, 5 por ciento a los 6 meses y el resto en amortizaciones largas, con facilidades. Se exige, para adquirir una parcela de tierra, ser mayor de edad, sano y de buenas costumbres. Esa ley, como este despacho, no prevé sino excepcionalmente, el arrendamiento.

Y, por fin, citaré la ley del Uruguay, de 1913, autorizando un empréstito de colonización para adquirir tierras y fraccionarlas con destino a ser colonizadas. También esa ley autoriza la expropiación, como lo propicia este despacho. Después, fué sancionada la ley del 21 de junio de 1921, autorizando al Banco Hipotecario para conceder préstamos sobre tierras agrícolas hasta el 85 por ciento de su valor. La Comisión Asesora de Colonización puede, de acuerdo con ese Banco, adquirir tierras para fraccionarlas y adjudicarlas. Para ser concesionario, se requiere ser agricultor, con capacidad probada. Se refiere a los nativos, y, tratándose de extranjeros, a los que tengan hijos uruguayos. Se orienta, como se ve, en el mismo sentido aconsejado por este despacho.

Después, fué sancionada la ley de 1923, autorizando un empréstito llamado de «Fomento Rural y Colonización», con el que se crea una sección en el Banco Hipotecario para hacer préstamos a fin de adquirir tierras y destinarlas a colonización. Los compradores deben adquirir esas tierras, pagando por lo menos un 15 % al contado.

La preocupación de nuestros hombres públicos por estos asuntos, nació con los albores de nuestra independencia política. Entre los antecedentes argentinos no puede dejar de citarse en primer término el decreto suscripto por Rivadavia el 4 de septiembre de 1812, incitando la inmigración, ofreciéndole ventajas y estableciendo esta premisa: «La población es el principio de la industria y el fundamento de la felicidad de los pueblos.»

Ya en esa iniciativa se vinculaba, de un modo indisoluble, el problema de la colonización al problema de la población.

La Asamblea del año 1813 dictó el decreto de 15 de mayo autorizando al Poder Ejecutivo a que vendiera tierras fiscales en la forma que creyera más conveniente para el incremento del erario. En esa medida legislativa asoma por primera vez, el propósito de hacer de las tierras públicas, fuente de recursos fiscales.

Por ley de 13 de mayo de 1817 el Congreso, a pedido del director Pueyrredón, lo autoriza

a repartir tierras a los pobladores en la demarcación de la fronteras.

Posteriormente, la provincia de Buenos Aires, durante el gobierno del general Martín Rodríguez, dictó una serie de decretos importantes sobre la tierra pública, en los años 1821 y 1823, otorgando extensiones importantes para pastoreo en la demarcación de las fronteras.

Así, a través de otras disposiciones de menor importancia, llegamos a la enfiteusis de Rivadavia que marca una época dominante en la evolución política y agrícola argentina.

El presidente Rivadavia empezó preparando el terreno de la futura ley y dictó a ese efecto el decreto del 17 de abril de 1822, inmovilizando la tierra y prohibiendo la escrituración de nuevas ventas.

Posteriormente, por ley del 19 de agosto de 1822, fué autorizado el Poder Ejecutivo para negociar un empréstito en Londres con la garantía de la tierra pública. Esta es la primera ley que vincula la tierra fiscal al propósito de respaldar o de garantizar el crédito público, contrariando, como recuerda Avellaneda, las ideas de Stuart Mill y de otros economistas.

Por fin, viene la ley de enfiteusis de 1826. Esa enfiteusis no era la enfiteusis romana y feudal, porque el pago del canon por parte del enfiteuta no significaba un acto de vasallaje hacia el señor de la tierra.

La enfiteusis de Rivadavia no constituía un derecho real en favor del beneficiario; era, en suma, un arrendamiento a largo plazo, por 20 años, por un precio proporcional al valor de la tierra y contenía otras ventajas y garantías para los ocupantes.

La enfiteusis de Rivadavia tuvo que caer y cayó con la política de aquel eminente hombre público.

Por fin, se volvió, por ley de 7 de julio de 1830, al sistema antiguo de las «mercedes» o donaciones.

Avellaneda, en su conocido *Estudio sobre las leyes de tierra pública*, ha hecho un juicio de la enfiteusis de Rivadavia, en forma que debe ser conocida no sólo por la profundidad de los conceptos, sino por la belleza de la forma en que aquel argentino eminente expresaba su pensamiento. «Concluye aquí —decía— la historia de la enfiteusis que, cuando sea debidamente escrita, figurará como una verdadera peregrinación durante 16 años, al través de la historia general del país. Abrela, Rivadavia. Ciérrala, Rosas. Principia luminosa, marcando la aparición de vastos propósitos. Desaparece abismándose en un lago de sangre. Ella refleja al mismo tiempo

el carácter de la situación intermedia y de las administraciones que van sucesivamente escalonándose, para formar la transición de una a otra época. Puede, por lo tanto, decirse que la historia legislativa de enfiteusis, con sus variadas peripecias, diseña en breve compendio los rasgos más prominentes de la historia política del país, durante uno de los períodos más dignos de estudio y de reflexión.»

Vinieron después las leyes de «premios», llamadas así porque hacen de la tierra pública un estímulo y el premio de los servicios prestados por los servidores eminentes del país.

Entre ellas, merecen citarse la ley de 30 de septiembre de 1834 y 25 de abril de 1835, por las cuales se reparten 67 leguas cuadradas a los que habían prestado servicios en la campaña del desierto. Por leyes del 29 de agosto y 5 de octubre de 1839 se repartieron vastas extensiones de tierra y, por fin, vino la ley de 9 de noviembre de 1839, dando grandes extensiones a los militares y aun a los civiles, por los servicios prestados al país.

En esta revista, un tanto larga y fatigosa de los antecedentes legislativos argentinos, no es posible omitir la ley de arrendamientos de la provincia de Buenos Aires, de 21 de octubre de 1857. Esa ley ordenaba arrendar todas las tierras que antes habían sido dadas en enfiteusis, con la característica de que el contrato de arrendamiento no impedía la venta de la propiedad. Era la más absoluta negación de la estabilidad de los ocupantes. Contra esa situación no se reaccionó, hasta la sanción del Código Civil de 1871, cuyo artículo 1.498, siguiendo y ampliando el principio del artículo 1.743 del Código francés, establece la conocida regla: «Enajenada la finca arrendada, por cualquier acto jurídico que sea, la locación subsiste durante el tiempo convenido.»

Este principio fecundo, que da estabilidad, por lo menos en forma relativa, a los locatarios de tierras urbanas y rurales evita, en muchos casos, abusos y exacciones de los dueños de las tierras.

La provincia de Buenos Aires, en la época de la secesión, sancionó numerosas leyes sobre tierras públicas que revelan un estado de transición y de grande anarquía en las ideas dominantes sobre la materia.

Entre esas leyes, están las del 29 de julio de 1857, que ordena la venta de los bienes de Rosas, confiscando, como decía un autor a quien había confiscado a sus enemigos; la ley de 14 de julio de 1857, prohibiendo la fundación de

nuevas capellanías; la de 8 de agosto de 1857, que ordena la venta de cien leguas en la frontera; la de 16 de octubre de 1857, vendiendo las ricas tierras de Chivilcoy; la de 18 de octubre de 1859, vendiendo 100 leguas al otro lado del río Salado; la de 12 de octubre de 1858, anulando las donaciones y ordenando la venta y arrendamiento de las tierras que antes habían estado en aquella situación, y, por fin, la de 14 de noviembre de 1864, que autorizó la venta de toda la tierra fiscal situada dentro de la línea de frontera.

Durante el Ministerio de Gobierno de Avellaneda, la provincia de Buenos Aires sancionó, con fecha 11 de enero de 1867, la ley por la cual se ordenaba la venta de 800 leguas que antes habían estado arrendadas, lo que significaba la aplicación práctica, desde el gobierno, de las conocidas ideas de su autor, que siempre se manifestó partidario decidido de la colonización sobre la base de la propiedad de la tierra y no del arrendamiento o donación.

Los primeros gobiernos que siguieron a la caída de Rosas no pudieron abordar la solución del problema que entraña la tierra pública, ni proyectar planes de colonización, requeridos como estaban por las necesidades perentorias de la lucha interna y de la guerra exterior.

Recién en 1876, durante la presidencia de Avellaneda, se logró sancionar la ley número 817, que todos los señores senadores conocen, y que representa la primera iniciativa de aliento, en materia de legislación, para la solución de este problema. Por esa ley, como se sabe, se creó el Departamento General de Inmigración; se fijaron las condiciones de los inmigrantes; se reguló todo lo relativo a las agencias de inmigración y se fijaban las obligaciones de las agencias navieras que los traían al país; se resolvió el alojamiento y la manutención de los extranjeros y se fijaron otros detalles que debían estar comprendidos en ese programa.

La segunda parte de la ley crea la Oficina de Tierras y Colonias, ordenando la exploración, mensura y división del territorio nacional en secciones, lotes, ejidos y manzanas. Entre sección y sección se mandaba dejar una sección sin subdividir, pero amojonada, destinada a ser utilizada por empresas particulares, a la reducción de indios y a pastoreo.

Esa ley ha dado los frutos que los señores senadores conocen, y fué derogada en todo lo que se refiere a inmigración por la ley número 4.167, que actualmente rige.

Después de la ley Avellaneda, fué sancionada en 1882, por inspiración del ministro del Interior, doctor Bernardo de Irigoyen, la ley número 1.265, sobre venta de tierras de propiedad de la Nación. Por esa ley, los territorios de La Pampa y Patagonia se dividían en secciones de un millón de hectáreas, éstas en cuatro fracciones, y éstas en lotes de diez mil hectáreas cada uno. Los territorios de Misiones y Chaco, en secciones de diez mil hectáreas y éstas en lotes de cien hectáreas. Se reglamentaba la forma de vender la tierra para pastoreo y para la agricultura; las primeras, por el precio mínimo de veinte centavos fuertes la hectárea y las otras, a dos pesos en Chaco y Misiones y a un peso y medio en la Patagonia.

Esta ley, como dice Miguel Angel Cárcano, señaló un retroceso en la evolución agraria argentina, porque no entrañaba ningún programa serio de colonización y de trabajo.

En 1902, por iniciativa del ministro Escalante, fué sancionada la ley número 4.167, sobre venta y arrendamiento de tierras fiscales. Se mandaban explorar y medir todas las tierras fiscales, reservándose lo necesario para pueblos y colonias agrícolas y pastoriles, disponiendo que la tierra restante fuera enajenada, no pudiendo venderse más de mil leguas por año al precio mínimo de 40 centavos oro o un peso moneda nacional.

En 1908, por iniciativa del ministro Exequiel Ramos Mexía, fué sancionada la ley número 5.559 que ordenó la construcción de cinco grandes ferrocarriles en los territorios nacionales, con propósitos de fomentar la colonización, como también la construcción de muelles y de obras de riego y otras que fueran necesarias para completar ese plan. La ley establecía que las tierras situadas en la zona de influencia de las obras no podían ser ni vendidas ni arrendadas hasta que no estuviesen concluidas, a fin de que las ventas se hicieran en las mejores condiciones posibles de explotación y de que su producido fuera suficiente para pagar el costo de las obras.

En esta revista de leyes argentinas, vinculadas a la materia de colonización, no puede omitirse la cita de la ley de arrendamientos agrarios número 11.170. Esa ley se inspira en el propósito de dar estabilidad a los ocupantes de las tierras, admitiendo el principio del plazo presunto y protegiéndolos contra los abusos de los dueños de esas tierras. Tampoco puede olvidarse la ley del hogar, número 10.284, proyectada por el diputado Julio A. Costa, con la

mejor inspiración, pero que no ha tenido, en realidad, aplicación práctica en el país.

No creo, señor presidente, aunque corra el riesgo de cansar un tanto a los señores senadores, que deba detenerme en el examen escueto de las leyes argentinas sobre esta materia. Me parece que debo referirme, siquiera sea sucintamente, a algunos de los proyectos que no llegaron a convertirse en ley, en los casos en que así lo aconseja la autoridad de sus firmantes, o porque entrañan soluciones que revelan cuáles eran los principios y las ideas dominantes en esa época de nuestra evolución agrícola.

En 1911, el ministro Lobos, mi distinguido comprovinciano, presentó cuatro proyectos: uno, sobre ley de tierras; otro, de régimen inmobiliario; otro, sobre los ferrocarriles y la población, y el último, sobre el embargo en las campañas, aceptando el principio de la inembargabilidad de las tierras, de las mejoras y de los elementos de trabajo, que también contiene este despacho. El ministro Lobos era partidario decidido de la colonización *capitalista* realizada por grandes empresas. En los fundamentos de su iniciativa, después de referirse a los inconvenientes que había deparado la aplicación de nuestra ley número 4.167, decía: «Entretanto, sin volver a las antiguas concesiones en el desierto, y tomando toda clase de garantías contra el latifundio, es fácil servirse de esas empresas con capital propio para que lo apliquen en la construcción de obras de irrigación y en todas las destinadas a habilitar económicamente la tierra en que constituirán pequeñas propiedades, en cambio de que se le escriture en propiedad mayor número de lotes alternados de los que permite la ley actual y que ellas tendrán interés en poblar para compensar un esfuerzo que el Estado no puede realizar con sus recursos ni con sus agentes.»

En esa época, estaban muy en boga las ideas que sustenta este tipo de colonización *capitalista*. Al año siguiente, el diputado Saavedra Lamas presentaba también un proyecto de colonización. Por él, se concedía la tierra a empresas de colonización que trajeran familias de agricultores, admitiendo que el Estado se asociara a esas empresas por el valor que representaba la tierra.

En 1914, presentó su proyecto de colonización, el diputado Lisandro de la Torre. Por él se ordenaba adquirir, por licitación, tierras especiales para agricultura, distribuyéndolas en las adistintas provincias argentinas, según su importancia: 40.000 hectáreas para Buenos Ai-

res; 30.000 para Santa Fe; 25.000 para Córdoba; 10.000 para Entre Ríos y Mendoza; 7.500 para Corrientes, Tucumán y San Luis; 5.000 para Santiago del Estero, Salta, San Juan, La Rioja, Catamarca y Jujuy. Esas tierras eran pagaderas en títulos de la deuda interna, del 5 % de interés y 1 % de amortización, y estaban destinadas a ser vendidas en fracciones menores de 60 hectáreas.

Insisto en esto de que casi todos los que han tenido iniciativas en esta materia, han preferido hacer reposar las leyes de colonización en el sistema de la propiedad y no en el sistema del arrendamiento. Estaban destinadas, según el proyecto del doctor de la Torre, a ser vendidas en fracciones menores de 60 hectáreas con la base del costo, gastos e intereses. Se prefería para ser concesionario de la tierra a los argentinos nativos o naturalizados, como lo dice nuestro despacho, obligando a los compradores a vivir en las parcelas concedidas, como también lo proponemos.

En 1924, el ministro Le Breton, presentó su proyecto de colonización. Por él se podía expropiar hasta un 50 % de las tierras aptas para ser colonizadas sobre la base de la fijación de precio que él establecía minuciosamente. También sostenía la conveniencia de entregar la tierra en propiedad a los agricultores. Recordaba las palabras del diputado británico Johnson Hicks, quien decía: «No basta con simples arrendamientos. La propiedad del suelo tiene cierta influencia mágica y mientras menor es la parcela mayor es el efecto mágico.»

En 1932, el ministro de Tomaso, presentó su proyecto creando la Comisión Nacional de Colonización. De acuerdo con esa iniciativa, se podía disponer en el plan de colonización de las tierras públicas y de las privadas que se ofrecieran. Esas tierras serían adjudicadas en venta prefiriendo a los que tuvieran mujer e hijos argentinos y también elementos de trabajo. Se pagarían en 10 años y se obligaría a los colonos a vivir en ellas.

Y por fin, me complazco en citar el proyecto presentado en 1936, por nuestro distinguido colega, el senador Laurencena, en el que propicia la solución de entregar las tierras por un período de prueba a los agricultores, período que duraría 5 años, con un contrato en el que se establecía la opción de compra. El precio del arrendamiento lo pagan con una parte de la cosecha. Más que arrendatarios son en realidad, verdaderos colonos parciarios; este proyecto trata de adoptar un sistema que es bien conocido y practicado en los trabajos agrícolas del país.

Nuestro sistema federativo ha permitido y ha impuesto a las provincias la sanción de muchas leyes importantes en materia de tierras públicas y de planes de colonización. Yo no me propongo agotar el examen de las mismas, pero creo conveniente citar, por lo menos, las leyes más fundamentales, sancionadas en los últimos años, para demostrar al Senado cuál es la orientación y las corrientes generales de ideas que inspiran las soluciones de este problema.

La provincia de Buenos Aires sancionó en 1936 la ley número 4.418, modificada al año siguiente por la ley número 4.566. Por esa ley, se creó el Instituto Autárquico de Colonización, con facultades de vender tierras, arrendarlas y administrarlas. Se autoriza también la expropiación de ellas. El instituto es administrado por un directorio compuesto de cinco miembros, a cuyo cargo está la selección de la tierra, el estudio y adopción de los planes de colonización y todo lo que se refiere al cumplimiento de la misma.

La provincia de Entre Ríos tiene la ley número 2.985, que autoriza al Poder Ejecutivo a vender, comprar y expropiar tierras aptas dentro de los 25 kilómetros de las estaciones ferroviarias y 60 de los puertos, para ser divididas y entregadas a la colonización granjera. Se crea un consejo agrario de siete miembros y se entra en detalles relacionados con la obligación de los concesionarios de las tierras, entre las que figuran trabajar y poblar personalmente las parcelas.

Entre Ríos tiene también la ley número 2.949, que crea el Banco de Entre Ríos, que está autorizado a disponer el 15 % de su capital para préstamos destinados a la adquisición de tierras y otros hipotecarios, destinados al fomento de la colonización agrícola.

Santa Fe sancionó la ley número 2.432, que dispuso la emisión de 10.000.000 de pesos en títulos destinados a la adquisición de tierras aptas, para ser vendidas a agricultores capaces, no mayores de cincuenta años y que reúnan las demás condiciones reglamentadas en la ley.

Por último, mencionaré el proyecto presentado en la provincia de Córdoba en 1936, creando la Dirección de Tierras de la Provincia, encargada de dividir, vender y arrendar las tierras que adquiera la provincia por compra directa a los particulares o por expropiación, determinándose que, para este caso, se aplicarán las normas y procedimientos de la ley nacional número 189.

Vamos a ver ahora, señor presidente, cuál es el estado de la tierra pública actualmente, cómo se ha manejado ella hasta hoy, cuál es la

superficie disponible y cuál es la superficie apta, para llevar a cabo con éxito planes de colonización, como el que entraña este proyecto.

Según los informes proporcionados por la Dirección de Tierras, se han vendido:

En cumplimiento de la ley	
Nº 817	5.248.515 hectáreas
En cumplimiento de la ley	
Nº 1.265	5.951.880 „
En cumplimiento de la ley	
Nº 4.167	5.052.920 „
En cumplimiento de la ley	
Nº 5.559	2.298.619 „
<hr/>	
Total	18.551.934 hectáreas

Hay todavía grandes extensiones de tierras vendidas en virtud de otras leyes y de otras disposiciones gubernativas, que hacen que la extensión total de tierra pública escriturada hasta el 31 de diciembre de 1939, sea de 40.763.882 hectáreas.

La tierra en arrendamiento en esa misma época era de 19.783.936 hectáreas.

Son, como se ve, cifras realmente federales, que sólo se explican en nuestro país como fruto de la imprevisión y de una situación que no ha conseguido nunca resolverse por la sanción de la verdadera y definitiva ley de tierras que requiere el país.

Se ha preguntado a la Dirección de Tierras cuál es la superficie disponible que existe en su poder e igual informe se ha solicitado a los bancos oficiales y a las entidades autárquicas. De esos informes resulta que la tierra fiscal disponible en 1938 era, aproximadamente, de 77 millones de hectáreas; la que tenía en su poder el Banco de la Nación era de 905.058 hectáreas; el Banco Hipotecario Nacional en 1934, 481.702 hectáreas; el Consejo Nacional de Educación, en 1938, 117.260 hectáreas, y el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, 1.046.423 hectáreas.

La comisión ha preguntado concretamente a la Dirección de Tierras qué extensión apta y en las condiciones del artículo 9º del despacho, existe dentro de esa área disponible; y la respuesta ha sido que hay, aproximadamente, 1.628.345 hectáreas.

En cuanto a las tierras en poder de los bancos oficiales y de las entidades autárquicas a que acabo de referirme, no hay un censo especial para saber cuál es la zona realmente apta; dependerá en gran parte, de la estrictez del criterio selectivo del Consejo Agrario Nacional,

pero puede estimarse que su superficie apta llega a una tercera parte de las extensiones que he mencionado.

Considero necesario, señor presidente, referirme, siquiera sea brevemente, al crédito agrario argentino, a las instituciones que lo sirven y a las leyes que lo rigen, porque esas leyes han de continuar rigiendo y han de constituir uno de los principales elementos de éxito para el plan de colonización que promete este despacho.

No ha sido posible entre nosotros la fundación de un banco nacional agrícola, a pesar de las numerosas iniciativas presentadas en ese sentido. Entre las que recordaré el proyecto del ministro Lobos, presentado en 1911, el del diputado Frers en 1913, el del ministro Calderón en 1915, el del diputado Le Breton en 1918, el del presidente Irigoyen en 1919 y el de los diputados Ortiz y Bas en 1920.

No voy a distraer mucho la atención de los señores senadores sobre las nociones de crédito agrario. En la sesión de 16 de agosto de 1938, al informar la reforma de la ley de crédito agrario, tuve oportunidad de decir todo lo que estimaba pertinente sobre esta materia.

Entre nosotros, el crédito agrario está servido por una sección del Banco de la Nación Argentina y fué creado por esa ley número 11.684, modificada después por la ley número 12.389.

Según la memoria del Banco de la Nación Argentina de 1939, la aplicación de esa ley y el desenvolvimiento del crédito agrario ha sido feliz y ha dado resultados halagüeños. Después de expresar que las operaciones de crédito agrario han aumentado considerablemente, manifiesta que, con relación al año precedente, ese aumento estaba representado por la suma de \$ 9.035.000 moneda nacional.

En lo que se refiere al crédito hipotecario, instituido por el artículo 2º, inciso i), de la citada ley número 11.684, para la compra y mejora de inmuebles, dice la memoria, que desde la iniciación de esta clase de créditos hasta fines de 1939, se habían acordado 5.943 préstamos por un total de \$ 86.525.506 m/n., gravando 956.594 hectáreas, lo que arroja un promedio de \$ 90 m/n. por hectárea. De esa suma, se había amortizado \$ 21.065.282 m/n. Agrega que a fines de 1939, se habían parcelado 170.000 hectáreas de tierra que fueron adjudicadas al banco en pago de créditos, por un total de \$ 12.700.000 moneda nacional.

El crédito agrario está también atendido por el Banco Hipotecario Nacional en cumplimien-

to de la ley número 10.676, artículo 29 inciso f), que autoriza especialmente los créditos de colonización.

Según los informes proporcionados por el Banco a la comisión, el número de solicitudes presentadas desde la vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre de 1939, era de 1.063, por una superficie ofrecida de 2.720.415 hectáreas, de terrenos que sus proponentes estimaban en un valor de \$ 765.515.595 moneda nacional.

Los préstamos escriturados se refieren a 7.551 lotes por un total de \$ 122.140.800 moneda nacional.

Los préstamos en vigor a esa fecha, eran de 6.621, por un monto de \$ 95.505.500 moneda nacional.

El monto de lo adeudado se había disminuído en \$ 26.635.300 m/n., por ejecuciones del banco y por amortizaciones voluntarias de los deudores.

Sr. Martínez. — ¿Esos 26.000.000 son de deudores en mora?

Sr. Landaburu. — Entiendo que sí, señor senador. Se había disminuído el monto de los préstamos en esa cantidad en virtud de las ejecuciones realizadas por el Banco y por las amortizaciones efectuadas.

Sr. Martínez. — No le he entendido bien, señor senador.

El señor senador ha dado las cifras correspondientes al monto de las operaciones que ha hecho el Banco Hipotecario en materia de colonización, que son sobre 7.000 y tantos lotes.

Sr. Landaburu. — 7.551 lotes, por un monto de \$ 122.140.800 moneda nacional.

Sr. Martínez. — Vale decir, que los préstamos del Banco Hipotecario ascienden a \$ 122.000.000 moneda nacional. Como posteriormente, el señor senador dió una cifra de \$ 26.000.000 m/n., que había sido disminuída, yo le preguntaba si esos \$ 26.000.000 m/n. eran deuda con mora o si eran amortización del préstamo primitivo.

Sr. Landaburu. — No puedo asegurar de un modo absoluto, pero entiendo que la disminución se refiere al volumen total de los créditos.

Lo que está fuera de duda, señor presidente, es que los préstamos de colonización servidos por el Banco Hipotecario Nacional no han dado los resultados que pudieron esperarse, a pesar de las preocupaciones del directorio del establecimiento, en virtud de dos inconvenientes fundamentales: el primero, se deriva del monto de los préstamos autorizados, hasta un 80 % del valor de las tierras. Esto es realmente excesivo. Y el segundo, la falta de medios eficientes del

Banco para controlar y seleccionar los agricultores.

Nosotros tenemos además, otras dos instituciones de crédito agrario: la creada por la ley número 9.644, llamada de «prenda agraria», y la que fundó la ley número 9.643, de «warrants» y certificado de depósito.

Según la memoria de Agricultura de 1938, en materia de prenda agraria tuvimos ese año 123.121 contratos, por un valor de 473.250.210,74 pesos. El 42 % del monto de esos préstamos corresponde a agricultura. Ese año, el volumen e importancia de las operaciones sobrepasa en mucho a las del año pasado.

En lo que se refiere a la ley número 9.643, según la memoria de Agricultura, tiene en 1937, el siguiente movimiento: se hicieron 46 emisiones de «warrants» por un total de 1.031.740 pesos. En este caso, a la inversa del anterior, las cifras de este año revelan evidentemente, una disminución de las operaciones, con respecto al año anterior.

Después de haber hecho esta rápida reseña de nuestras leyes de tierra pública y de haber dado las cifras que corresponden a las extensiones enajenadas, arrendadas y disponibles, forzoso es aceptar como un hecho que la colonización oficial directa ha fracasado entre nosotros. Apenas hay algunas colonias lejanas y despobladas, fundadas en virtud de las leyes números 817 y 4.163.

Tampoco ha tenido éxito la colonización *capitalista*, no sólo por la falta de una ley especial que la fomentara entre nosotros, de acuerdo con algunas de las iniciativas que he recordado, sino porque a ella se opondrían siempre, razones que hacen muy difícil su implantación y su cumplimiento.

Ese tipo de colonización entraña siempre un propósito especulativo y tiende a aumentar el precio de la tierra, colocándolo fuera de las posibilidades normales de los agricultores.

A la colonización privada debemos todo lo que el país ha podido realizar en esta materia.

Pero si bien es cierto, señor presidente, que esa colonización ha tenido mucho éxito, sobre todo en la región cerealista argentina, hay que admitir forzosamente que no ha llenado los objetivos fundamentales a que debe propender una ley de colonización nacional. Esas extensiones se han cultivado, pero no se han colonizado ni poblado, tal como lo propone esta ley. La mayor parte de esos colonos están vinculados eventualmente a la tierra, que trabajan por el sistema del arrendamiento, y es frecuente ver anualmente, o al cabo de ciertos periodos, los éxodos de agricultores nómades y trashuman-

tes, que van de un campo a otro buscando nueva radicación y nuevos horizontes para su trabajo.

El sistema de colonizar por arrendamiento, tiene, desde luego, el inconveniente de que no radica el hombre a la tierra y no llena entre nosotros, uno de los objetivos fundamentales a que debe tender una ley de esta naturaleza. Tengo aquí expresada una opinión de gran autoridad, del ingeniero Emilio A. Coni, que haciendo la crítica de un proyecto de colonización dice a ese respecto lo siguiente:

«La cifra de 65 % de arrendatarios que arroja la estadística de la zona cereal argentina, dice bien a las claras que esa zona podrá estar «poblada», pero no está «colonizada». Las dos terceras partes de sus explotaciones agrícolas carecen de dos garantías fundamentales en la industria agrícola: la estabilidad y la libertad de explotación.

«A pesar de toda buena voluntad y tolerancia que han puesto la mayoría de los dueños de campos, para aliviar la situación de esos arrendatarios; a pesar de la ley de arrendamientos agrícolas sancionada por el Honorable Congreso; a pesar de las leyes de fomento y ayuda sancionadas o en vías de sancionarse, el sistema del arrendamiento tiene vicios intrínsecos, que reducirán considerablemente el efecto de todas esas medidas de protección y que exigen imperiosamente la adopción de otro sistema que permita un mejor rendimiento del suelo».

Y se declara decidido partidario del sistema de colonizar sobre la base de entregar las tierras en propiedad a quienes las trabajen.

Esta es, señor presidente, la idea conocida y elocuentemente expuesta por Avellaneda en el libro que citara hace un instante: *Estudios sobre las leyes de tierras públicas*. Aquel eminente argentino no concebía que pudiera fundarse un plan de colonización sobre otro sistema estable que no fuera el de entregar las tierras en propiedad.

«La propiedad territorial da a los hombres — dice — energía en su carácter e independencia en su vida, dotándolos de estas dos grandes calidades que no deben faltar al ciudadano de una república. Así ella debe ser fomentada y liberalmente concedida por todo gobierno que no calcule sobre la depresión sistemática del hombre, tanto en sus facultades como en sus medios de acción. Verdad es que una nación no puede hacer que todos los ciudadanos sean propietarios; pero, cuando ella tiene bajo su dominio, como la nuestra, vastas extensiones de territorio, sólo debe darlas a la industria pri-

vada en propiedad absoluta. De esta suerte, la propiedad territorial se multiplica y difunde, empleando un resorte natural y fácil.»

Y más adelante, formula las objeciones al sistema de arrendamiento y dice: «El arrendamiento enerva las facultades del hombre y esteriliza el poder productivo del suelo, y es necesario por lo tanto proscribirlo de nuestras leyes sobre la tierra pública, en interés de su cultivo, de las instituciones libres, de la población que no se arraiga, porque sólo la propiedad produce «ese amor de la tierra» que hace pasar al objeto poseído alguna cosa del pensamiento y del alma del propietario. La ley agraria argentina, provincial o nacional, no puede emplear cuerda-mente otro régimen para la colocación de la tierra pública que el de la propiedad por la venta.» Pero este sistema de entregar la propiedad o la venta en pequeñas parcelas con obligaciones precisas, entre ellas, la de poblar la tierra y trabajarla con la familia, no sólo ha de referirse en el anhelo de resolver el problema por el colono extranjero; hay que pensar también, señor presidente, en el elemento nativo, totalmente abandonado en nuestras previsiones legislativas y de gobierno.

El doctor Miguel Angel Cárcano, en su *Evolución histórica del régimen de la tierra*, estudio, quizá el más completo que se haya hecho en el país sobre esta materia, dice al respecto lo siguiente: «Uno de los ideales de la democracia es hacer propietario al mayor número de ciudadanos. La República ha descuidado este principio y olvidado practicarlo.»

Y más adelante agrega: «El concepto general que preside las leyes agrarias argentinas, fué radicar la población de extranjeros en el país, sin pensar en el elemento nativo, huérfano del pegujal a que era acreedor. Estanciero, por tradición y por gusto, el ciclo agrícola lo sorprende todavía a caballo.» Y en seguida dice: «El inmigrante ha tenido siempre mayores facilidades para adquirir la propiedad. El hecho es infundado y debilita la fuerza de la solidaridad nacional. La propiedad de la tierra cada día aumenta en manos del extranjero. El hijo del país es un elemento de trabajo. Se han invertido los términos de la ecuación ideal: el extranjero debe ser el elemento de trabajo para la riqueza del ciudadano y el progreso del país.»

El despacho se inspira francamente en esos principios, y se propone llevar a término un plan de colonización sobre la base de la selección de la tierra y de la selección de los agricultores, exigiendo a éstos, además de la capacidad legal, aptitud profesional y personal.

Se trata de una colonización agrícola del tipo familiar, que obliga al concesionario de las tierras, a vivir en la parcela y a trabajarla, so pena de rescisión del contrato. Las dimensiones de estas parcelas no se establecen en la ley y se deja a criterio del Consejo Agrario Nacional, quien debe de hacerlo, teniendo en cuenta la topografía del terreno, la naturaleza de los cultivos y los demás factores que deben intervenir para resolver acertadamente este punto.

Y habiendo hablado de la división de la tierra, llego espontáneamente al problema argentino, tantas veces abordado, del latifundio.

El latifundio perdió a Roma según la vieja afirmación de Plinio. A nosotros, no nos ha perdido todavía, pero nos ha causado preocupaciones y nos ha suscitado problemas que estamos tratando de solucionar.

Muchas doctrinas y muchos medios, se han propuesto a este respecto. Desde luego, la creación de impuestos fundiales progresivos y de impuestos a la tierra libre de mejoras.

En 1912, fué presentado al Congreso Nacional por el entonces ministro de Hacienda, doctor Enrique S. Pérez, un proyecto de ley que ordenaba la valuación de las tierras excluyendo de ellas el valor de los edificios, de los cercos, plantíos, etcétera, proyecto que estaba orientado, francamente, en el propósito de disminuir o de combatir el latifundio, que, por desgracia, no fué sancionado.

Por fin, se ha propuesto y aceptado por muchas legislaciones...

Sr. Martínez. — ¿Me permite el señor miembro informante?

Sr. Landaburu. — Con mucho gusto.

Sr. Martínez. — Para recordarle que si en el orden nacional no ha dejado de ser un proyecto el establecer la contribución libre de mejoras, ha habido provincias que se han adelantado en ese sentido, como la de Córdoba, que desde el primer gobierno del doctor Cárcano, en 1913, estableció que la contribución territorial se pagara por el valor desnudo de la tierra, vale decir, con prescindencia de toda mejora, para estimular la subdivisión de la tierra; y también por zonas, para evitar al mismo tiempo, la arbitrariedad fiscal.

Sr. Landaburu. — Conozco el antecedente, señor senador, y me habría sido muy grato citarlo en seguida, siéndome igualmente satisfactorio que el señor senador por Córdoba se haya anticipado.

Sr. Laurencena. — ¿Me permite el señor miembro informante? Ya que el señor senador por Córdoba ha querido reivindicar ese mérito

para su provincia, debo hacer presente que en Entre Ríos, desde hace muchos años, desde 1920, existen incorporados a la legislación sobre contribución directa, los dos principios que ha mencionado el señor senador, porque allí el impuesto es progresivo y recae sobre la tierra libre de mejoras.

Sr. Landaburu. — Muy bien, señor presidente; me complacen las dos interrupciones y reconozco la exactitud de los hechos a que se han referido los señores senadores por Córdoba y por Entre Ríos.

Sr. Rothe. — ¿Quisiera, señor senador, permitirme una tercera interrupción?

Sr. Landaburu. — Muy complacido.

Sr. Rothe. — Desearía preguntarle al señor miembro informante en qué sentido el latifundio es en nuestro país perturbador de la economía.

Sr. Landaburu. — Señor senador, estoy recién entrando en el tema. Trataré, en el momento oportuno, de responder a la pregunta del señor senador; si así no fuera, me coloco desde ya a su disposición.

Sr. Laurencena. — Mi interrupción tiende a hacer notar, señor presidente, que Córdoba y Entre Ríos son las dos provincias que en la estadística, tienen el mayor número de agricultores propietarios en el país.

Sr. Martínez. — Por eso, muchas veces hemos estado juntos, con Entre Ríos.

Sr. Landaburu. — Continúo, señor presidente.

No me molestan en lo más mínimo las amables interrupciones, pero no deseo colocar al Senado en la necesidad de escucharme por un tiempo exagerado.

Sr. Palacios. — Lo escuchamos siempre con mucho placer.

Sr. Landaburu. — Muchas gracias, señor senador.

Otra de las soluciones, diría revolucionarias y drásticas, para combatir el latifundio, es la expropiación de las tierras que los constituyen, para destinarlas, como se propone en este despacho, a la colonización.

No voy a entrar, por ahora, señor presidente, en este capítulo de la expropiación, que está incorporado a muchas leyes extranjeras y a muchas leyes y proyectos argentinos, porque presiento que tendré que hacerlo después, para contestar algunas objeciones que se harán al despacho y, sobre todo, porque me lo hará necesario la discusión en particular.

Sr. Laurencena. — Sobre ese punto va a ser difícil que le hagan objeciones, señor senador.

Sr. Landaburu. — Bien, señor senador, no anticipemos los hechos.

He querido dar, desde ya, una explicación para no entrar por ahora en mayores detalles.

Sr. Laurencena. — Sería una lástima que si no se formulan objeciones, quedara el señor senador sin exponer sus ideas.

Sr. Caballero. — Yo las voy a formular, señor senador. *(Risas.)*

Sr. Landaburu. — No acostumbro a curarme en salud, señor presidente. He procurado ponerme en contacto con la mayor parte de mis distinguidos colegas, para saber de qué modo iban a recibir este despacho, y tengo la información anticipada de que va a merecer algunas observaciones en el capítulo de la expropiación, entre ellas, la que acaba de anunciar el señor senador Caballero. Como no quiero pasar como sobre ascuas un capítulo tan fundamental como éste, me limitaba a decir que me reservo el derecho de abordarlo cuando esas objeciones sean hechas.

El concepto del dominio ha evolucionado considerablemente en el mundo civilizado y tiende también a evolucionar entre nosotros. Sólo excepcionalmente se acepta el concepto que inspiró las sanciones del Código Civil, de un dominio eminentemente individualista, permanente, absoluto y exclusivo, que se descentraba por completo de toda finalidad y de todo interés social.

Son muchas y muy autorizadas las opiniones que se han expresado ya para la adopción de otro sistema de dominio que modifique la vetusta concepción de nuestro Código Civil. Tengo aquí la opinión de mi distinguido amigo, el doctor Héctor Lafaille, profesor de derecho civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que presentó en 1924 un informe al consejo, muy interesante, del cual sólo voy a leer un párrafo. Después de aludir al Código Civil y de anunciar la objeción que formula al concepto de dominio que él preconiza, dice: «Medio siglo de distancia, y las transformaciones graves que la humanidad experimentara en los últimos tiempos, han venido a intensificar aquellas deficiencias originarias de la ley. Pese a la extensión territorial y al corto número de habitantes, la propiedad —así concebida y reglamentada— es ya una rémora para el desenvolvimiento del país. Se impone, pues, que las clases dirigentes abandonen la idea de un dominio egoísta, sin obligaciones —antisocial por excelencia— capaz tan sólo de fomentar el odio colectivo y de su ministrar cómodos argumentos a los agitadores.»

Continúa desarrollando este tema con la autoridad y con la elocuencia de que es capaz, y entra en otras consideraciones, que no voy a leer para no alargar inútilmente esta exposición.

El Congreso Universitario, reunido en Córdoba, en 1925, sancionó por iniciativa de mi distinguido comprovinciano, el doctor Tomás Joffré, una proposición que aconsejaba derogar el artículo 2.510 del Código Civil, que se refiere a la perpetuidad de dominio, cuando ese derecho no fuere ejercido activamente en un período prudencial.

Sr. Martínez. — ¿Este artículo es derogado por este proyecto de ley?

Sr. Landaburu. — No, señor senador; se modifica.

Y el Congreso Nacional de Derecho Civil, reunido en la misma ciudad de Córdoba, dos años después, sancionó, después de largo y erudito debate, esta conclusión: «El concepto individualista absoluto bajo el cual está organizada la institución del dominio en nuestro Código Civil, debe ser substituído por otro más amplio que concilie el interés social y el particular, garantizando el uso y goce de la propiedad raíz mientras se mantenga en acción, conforme a su destino. El Estado debe intervenir para que la propiedad cumpla la función social que le es propia.»

En la Cámara de Diputados se ha tratado, como no podía menos de serlo, este aspecto del problema relativo al latifundio. Fué abordado especialmente por el señor diputado Repetto, que se refirió, con amplitud y con cifras, a los inconvenientes del cultivo extensivo en nuestro país, a las grandes explotaciones pecuniarias; habló de la aristocracia ganadera argentina, a la que le atribuyó consecuencias funestas para nuestro progreso agrario y general.

Voy a leer sólo un párrafo del señor diputado Repetto, para no traicionar en lo más mínimo su pensamiento y para que los señores senadores tengan la filiación exacta del mismo.

Después de afirmar «no tengo ni siquiera un ternero» —afirmación que me es cómodo compartir— decía: «El crecimiento de la población argentina se halla doblemente retardado por la persistencia de las grandes estancias. Este régimen atenta contra la división y la población del suelo. Por otra parte, impone el celibato a la masa de hombres, relativamente reducida que emplea en sus trabajos. Un peón de estancia, es necesariamente célibe. Es un sistema de cría de ganado que mantiene y perpetúa el desierto. Es fácil imaginar la influencia detestable que semejante estado económico y social debe ejercer sobre el desarrollo de la civilización y del progreso político argentino.»

Continúa refiriéndose al latifundio azucarero, cerealista y a las grandes estancias argentinas.

Este concepto fué contestado, parcialmente, en el recinto y lo fué después, también, fuera del Congreso.

El doctor Alejandro E. Bunge publicó un interesante trabajo en la «Revista Económica Argentina», titulado «¿Estancias, chacras o granjas?», y el señor Alberto Caprile (hijo), publicó a su vez, una carta en «La Nación», el 19 de julio de 1939, contestando los fundamentos y argumentos del señor diputado Repetto. Ambas opiniones sostenían que era necesario mantener las grandes explotaciones pecuarias y aun los cultivos extensivos en nuestro país, a fin de conservar nuestro rango de país exportador, de mantener el prestigio de nuestros productos y de seguir alcanzando los altos precios que ellos habían conseguido en los mercados del exterior, y negando que de esas grandes explotaciones agropecuarias, se desprendiesen los inconvenientes que el diputado socialista había señalado. Yo no voy a continuar desarrollando en detalle los argumentos de uno y otro, porque no participo en absoluto de ninguno de ellos.

Yo creo, señor presidente, que ambas conclusiones son inaceptables. Son ciertas en lo que afirman, pero son falsas en lo que niegan. Yo no creo que deba ni pueda plantearse el problema en nuestro país en el sentido de una disyuntiva forzosa: estancias, chacras, granjas; sino como una afirmación que establezca y que proclame la posibilidad y la necesidad de una concurrencia armónica de esa triple actividad de colonización en nuestro país, diciendo entonces: ¡estancias, chacras y granjas!

Nosotros tenemos por la inmensidad de nuestro suelo, por la variedad de nuestro clima y de nuestras tierras, posibilidad completa para realizar esa concurrencia armónica.

Yo necesito decir al Senado, en nombre de la comisión, que esta ley no es tan avanzada, ni tan revolucionaria como parece suponer la defensa anticipada de aquellos que creen ver amenazadas las grandes estancias y todos los cultivos extensivos. No, señor presidente; esas estancias pueden existir y esos cultivos extensivos pueden seguir haciéndose, pero en las regiones donde resulten eficaces y donde deban hacerse. No es ésa una razón valedera para oponerse a la sanción de una ley de colonización de tipo familiar, como ésta, que sólo se propone entregar a la actividad y al trabajo las tierras fiscales y entidades oficiales y las que se hallen en agricultura en poder de los latifundistas, cuando aquellas no fueren suficientes para un plan completo y exitoso de colonización.

Esta ley se inspira en el propósito de aumentar el número de pequeños propietarios, de descongestionar también la población, acumulada en las ciudades y llevarla al agro argentino, facilitándole recursos para que pueda vivir allí cómodamente.

La coexistencia de este tipo de agricultores que propicia el despacho, en nada afectará el desarrollo de las grandes estancias. ni tampoco impedirá la continuación de los cultivos extensivos, cuando sean convenientes.

Sería curioso que en nombre de razones de ese orden se plantearan inconvenientes a la sanción de una ley tan esperada y tan auspiciada en nuestro país.

Ese tipo de pequeño propietario es el que ha hecho el progreso agrícola de los Estados Unidos, del Canadá y de Nueva Zelandia, y es el que nuestro país espera y necesita para aumentar el número de hombres libres, dedicados al desarrollo de estas actividades relacionadas con la producción de la principal fuente de riqueza, saliendo de una vez por todas, de la miserable condición de eternos tributarios sometidos al dueño de la tierra.

Después de haber hecho, señor presidente, esta reseña de opiniones en cuanto respecta a las bases y orientaciones fundamentales de la ley, y haber recordado la legislación extranjera y argentina sobre esta materia, así como los proyectos legislativos que hasta ahora no han logrado sanción, he de hacer una rápida reseña de las soluciones concretadas en el despacho que se propone.

Desde luego, se trata de una ley de colonización agrícola de tipo familiar encaminada a trabajar las tierras aptas, que están situadas en las zonas que se determinen en el interior del país, a elevar el nivel de vida de los trabajadores del campo y a propender a su cultura agraria y general en todos los órdenes de la vida. Para ese objeto y como autoridad central, se crea el Consejo Agrario Nacional, compuesto de 5 miembros, que deben ser argentinos y cuya designación se hará con acuerdo del Senado, para mayor garantía de acierto. Se fijan las atribuciones y los deberes del Consejo Agrario Nacional en preceptos amplios, que se hace cargo de las tierras a colonizar, adquiere la tierra necesaria, estudia planes de colonización, la divide y la entrega a los solicitantes, en venta o en arrendamiento, con opción de compra.

Esas tierras son, como ya he dicho, las tierras fiscales disponibles, las de los bancos públicos y de las entidades autárquicas, que reúnan las condiciones ecológicas prescriptas en

la ley y que estén situadas a las distancias que ella establece, 30 kilómetros de los ferrocarriles o caminos de pavimentos firmes o 400 kilómetros de los mercados de consumo o puertos de embarque.

El despacho ha introducido una modificación a la sanción de Diputados, estableciendo que, excepcionalmente, el Consejo Agrario Nacional puede adquirir tierras para colonizar fuera de esa distancia, cuando motivos especiales así lo aconsejen.

El Consejo Agrario Nacional puede introducir mejoras en las tierras, antes de dividir las y entregarlas a los particulares.

El sistema esencial aceptado en el despacho es el de la entrega de las mismas a título de venta. El precio es pagadero en una forma muy cómoda, $\frac{1}{2} \%$ de amortización anual acumulativa y $2 \frac{1}{2} \%$ de interés, hasta integrar el 50 %. En ese momento se puede entregar el crédito al Banco Hipotecario Nacional en las condiciones usuales de ese establecimiento. Si el Banco lo aceptara —y esta es también una modificación introducida a la sanción de la Cámara de Diputados— el Consejo Agrario Nacional optará entre escriturar la tierra con reserva de primera hipoteca por el saldo o demorar la escrituración hasta que sea pagado todo el precio.

Se fijan las normas de cultivo, tratando de racionalizarlo y evitando lo que ocurre todos los días, que los agricultores, por falta de nociones o por uso de medios inadecuados en la selección de semillas y preparación de la tierra, pierden el fruto de su trabajo.

Se crean los consejos agrarios locales, descentralizando las funciones del Consejo Agrario Nacional, por facultades similares de contralor, de información y de colaboración en el cumplimiento de la ley.

Se crea un fondo de ahorro, con una cuota que debe fijar anualmente el Consejo Agrario Nacional, además, de la que corresponde al precio. Ese fondo de ahorro está destinado a aumentar la cuota de amortización del precio; a crear la posibilidad de adquirirla cuando la ocupación de la tierra sea a título de arrendamiento; y, finalmente, a atenuar los inconvenientes de los malos años agrícolas.

La ley prevé clara y expresamente, los motivos de rescisión de los contratos de compra-venta y de arrendamiento con opción o compra, que no son otros que los de no trabajar la parcela, no vivir en ella con su familia, no pagar el precio en las épocas convenidas. Para esos casos, el Consejo Agrario Nacional tiene derecho a embargar la tierra y sus mejoras, no pu-

diendo la tierra estar afectada a ningún otro destino o deuda que no sea el que tenga con el Consejo Agrario Nacional por el saldo del precio de compra o por el arrendamiento.

La ley prevé la colonización privada, siempre que se ofrezca al consejo sujetarse al régimen previsto. En ese caso las tierras están libres del impuesto territorial.

Prevé también la colonización intensiva, ejidal que conduciría a la formación de pequeñas parcelas para quintas y granjas.

Se refiere expresamente a la inembargabilidad de la tierra, de las mejoras y útiles de trabajo, distinguiendo entre las deudas anteriores y las posteriores a la celebración del contrato, principio útil y fecundo que evitará a los agricultores la amenaza de todo otro compromiso que no sea el contraído especialmente con ese origen.

Prevé, también, la colonización indígena, sin hacer de ella un capítulo especial, previendo la situación de los pocos que quedan ya en el país, siendo de recordar que este tema ha merecido la presentación de proyectos especiales que nunca fueron sancionados.

Prevé, también, la colonización fronteriza. Esa disposición es más importante todavía que la anterior.

Hace pocos días, señor presidente, releía el interesante libro del general Sarobe, titulado *La Patagonia y sus problemas*, que contiene reflexiones muy juiciosas que deben llamar poderosamente la atención de los poderes públicos, sobre la necesidad de preocuparse de la situación de aquellas remotas y desoladas regiones.

Recuerda el autor que la densidad demográfica de la vertiente del Pacífico es cincuenta veces superior a la existente en la Patagonia; que ésta tiene 95.000 habitantes y que sin embargo, hay en ella riquezas ingentes, inverosímiles, para quien no tenga referencias directas o no haya leído publicaciones al respecto. Hay allí 16.000.000 de ovejas, y una gran riqueza forestal, minera y pesquera. Es de creer que el Consejo Agrario Nacional ha de dedicar una atención preferente a las prescripciones de esta ley en lo que se refiere a la colonización fronteriza.

La comisión ha introducido un capítulo nuevo, en el que me voy a detener dos minutos: es el relativo a la colonización granjera.

La sanción de la Cámara de Diputados apenas tiene referencias incidentales en el artículo 56, a título de colonización suburbana, previendo la formación de quintas y de granjas.

La Comisión de Agricultura cree que la colonización granjera debe tener otro rol, que debe ocupar otro lugar y que debe merecer una mayor preocupación en esta ley, constituyendo uno de los capítulos más fundamentales.

Ese tipo de colonización tiene una gran opinión en el país. Se han presentado numerosos proyectos especiales de colonización granjera. Citaré el del diputado Aguirre, en 1914, el del diputado Le Breton, en 1918, el del diputado Caracoche, en 1919, el del diputado Quirós, en 1922, el de los diputados Rodríguez y Miñones, en 1928.

Este tipo de colonización está especialmente previsto en la provincia de Entre Ríos por la ley número 1.885 y en la provincia de Buenos Aires por la ley número 4.418, y ha sido auspiciado especialmente por el congreso ad hoc reunido en esta Capital, y que funcionó en los meses de abril a julio de 1934.

Mi comprovinciano, el doctor Julio A. López, médico estudioso, que ha recorrido casi todo el país, ha publicado recientemente un libro que me complace en citar. Se llama *La voz de América*, y tiene como subtítulo *Colonización granjera*. En ese libro, su autor sostiene, con argumentos irrefutables, que este tipo de colonización es el que debe merecer especialmente la preocupación de los poderes públicos y el que primero debe implantarse.

Yo no quiero extender demasiado este informe entrando a examinar los motivos fundamentales que apoyan esta clase de colonización, pero no puedo eximirme de la tarea, porque constituye, como digo, un capítulo nuevo incorporado por la comisión, de decir dos palabras siquiera sobre este asunto. La colonización granjera permite a quien la realiza ocupar útilmente su tiempo en los períodos en que la explotación agrícola lo deja libre. Le permite igualmente atenuar los inconvenientes de los malos años agrarios, compensándolos con las ventajas que haya podido obtener en algunos renglones de la producción granjera. Y, finalmente, radica mejor al hombre en la tierra, porque le ofrece permanentes motivos de pre-

ocupación y de trabajo, eliminando casi por completo toda posibilidad de éxodo o de abandono de la región en que realiza su labor. Estas ideas han sido clara y ampliamente expuestas también en el mencionado trabajo del ingeniero Coni, a quien hice referencia.

El despacho contiene un capítulo relativo a los recursos con que contará el Consejo Agrario Nacional. Se destinan \$ 30.000.000 m/n. en títulos, en dinero o del beneficio de cambio, pudiendo concurrir simultáneamente las tres fuentes; y se destinan, también, \$ 70.000.000 m/n. pagaderos en cuotas anuales de \$ 10.000.00 m/n. Además, tiene el producido de la aplicación de las leyes de tierra pública, que correrá a cargo del Consejo Agrario Nacional.

Como consecuencia de la sanción de esta ley, será refundida con el Consejo Agrario Nacional, la actual Dirección General de Tierras; lo será paulatina y progresivamente, y pasará entonces al Consejo Agrario Nacional todo lo que se refiera al cumplimiento de las leyes generales de tierras.

Señor presidente: podría extenderme sobre otros aspectos de este amplísimo asunto, pero he ocupado ya por mucho tiempo la atención del Senado, y no deseo ser mayormente cargoso con los distinguidos colegas que han tenido la deferencia de escucharme. Termino, entonces, diciendo en nombre de la Comisión de Agricultura, Industria y Comercio, que estamos profundamente convencidos de la necesidad de sancionar esta ley, y que si el Poder Ejecutivo organiza acertadamente el Consejo Agrario Nacional y confía a buenas manos la ejecución de la misma, ella ha de deparar buenos frutos y resultados fecundos para el progreso agrario de la República. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Palacios. — Hago moción de pasar a cuarto intermedio.

Sr. Presidente. — No habiendo número en la casa, queda levantada la sesión.

—Era la hora 18 y 20.

RAMÓN COLUMBA.
Director de Taquígrafos.